



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**Política Social en el sector justicia. El Programa de
Defensa Pública en Lima, 2009**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Política Social

AUTOR

Elda Aurora JAVIER ISLA

ASESOR

José Antonio ÑIQUE DE LA PUENTE

Lima, Perú

2011



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Javier, E. (2011). *Política Social en el sector justicia. El Programa de Defensa Pública en Lima, 2009*. Tesis para optar grado de Magíster en Política Social. Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

ÍNDICE

Pág.

TÍTULO

**“Política Social en el Sector Justicia. El Programa de Defensa
Pública en Lima 2009”**

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN	1
1.1 La Política Social, los Programas Sociales y el Sector Justicia	2
1.2 Formulación del Problema	20
El Programa de Defensa Pública en Lima 2009.....	20
1.3 Justificación Teórica del Trabajo de Investigación	21
1.4 Justificación Práctica del Trabajo de Investigación	22
1.5 Objetivos	23
1.5.1 Objetivos Generales.....	23
1.5.2. Objetivos Específicos	23

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO	24
2.1 Antecedentes de la Investigación.....	25
2.2 Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación	31
Desarrollo Económico y Reforma Judicial.....	31
2.3 Bases Teóricas	34
Los Convenios Internacionales y el Derecho de Defensa	34
a. Declaración Universal de Derechos Humanos	34
b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.....	37
c. Convención Americana sobre Derechos Humanos	43
La legislación nacional	45
2.4 El Programa de Defensa Pública	62
2.5 Definición de Términos.....	64

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA.....	67
3.1 Hipótesis	68
3.1.1 Hipótesis General.....	68
3.1.2 Hipótesis Específicas	68
3.2 Diseño y Tipo de Investigación	68
3.3 Población y Muestra.....	69

3.4	Variables	70
3.5	Técnicas e Instrumentalización de Recolección de Datos	72
3.6.1	Tipos de Técnicas e Instrumentos a utilizar	72
	a) Encuesta	72
	b) Entrevista	72
	c) Instrumentos	72
	d) Análisis Bibliográfico	73
3.6.2	Criterios de Validez, Calidad y Confiabilidad de los Instrumentos y Técnicas	73
3.6.3	Procedimientos para la recolección de datos.....	74

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN	75
4.1 Resultados Descriptivos.....	76
4.2 Pruebas de hipótesis.....	97
4.3 Discusión de los resultados.....	112

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	118
5.1 Conclusiones.....	119
5.2 Recomendaciones.....	122

ANEXOS.....	125
Anexo N°1.....	126
AnexoN°2.....	128

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	129
---	------------

**POLÍTICA SOCIAL EN EL SECTOR
JUSTICIA. EL PROGRAMA DE DEFENSA
PÚBLICA EN LIMA 2009**

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 La Política Social, los Programas Sociales y el Sector Justicia

El definir qué se entiende por Política Social nos lleva a buscar sus orígenes a fin de establecer el ser de la cosa estudiada como sugiere Manuel Moix Martínez en su estudio denominado “Como se entiende hoy la Política Social. Consideraciones Críticas cuando señaló:

“ (...),el ser de la Política Social estaría constituido por lo que ésta ha venido siendo desde sus orígenes”¹

Agregando en otra parte, que:

“(…), se cree que la Política Social nace en el último cuarto del pasado siglo con el propósito de moralizar la economía liberal, a fin de evitar las indeseables, por injustas, consecuencias sociales de la Revolución Industrial: y que nace gracias a la “jungere Historische Schule” – “joven Escuela Histórica”- y que más concretamente, a los “Nationalökonomien” de tal escuela y, fundamentalmente, gracias a su principal portavoz, el profesor de Economía Política, primero en la Universidad de Estrasburgo y luego en la de Berlín. Gustav Schmoller, quien el 06 de octubre de 1872 fundó el “Verein für Sozialpolitik” – “La Unión para la Política Social”²

Sin embargo hay que tener en cuenta que también existe la denominada “Política Social Anglosajona” la misma que se origina en el “Poor Law” es decir el “Derecho de los Pobres” de tiempos de la Reyna Isabel I de Inglaterra.

La “Política Social” cuyos orígenes se sitúan en Alemania conocida como Latina, Europea Continental o Mediterránea se caracteriza, por haberse ocupado desde sus orígenes, en el trabajo dependiente y

¹ Manuel Moix Martínez. Cómo se entiende hoy la política social. Consideraciones Críticas. Ed. Universidad Complutense. Madrid, 1988, pg. 79

² Ibidem, pg. 79

subordinado, esto es, en el trabajo por cuenta ajena. Por esta razón, su objeto fundamental es la protección del trabajador. En cambio en el caso de la “Política Social Anglosajona”, se busca, cuidar de los que no quieren o no pueden trabajar: es decir de los vagos, vagabundos o maleantes, en el primer caso, asimismo en el segundo caso se toma cuidado de los ancianos, niños enfermos, inválidos, personas dependientes, quienes en su mayoría no pueden trabajar. En resumen el objetivo de la “Política Social Anglosajona” es preservar de la pobreza a cuantos se vean envueltos en situaciones en las cuales resulten vulnerables.

Moix Martínez plantea una definición de Política Social en los siguientes términos “(...) la Política Social de nuestro tiempo, considerada en su vertiente práctica, esto es, entendida como actuación reflexiva para modificar la realidad social, debería definirse como “toda acción organizada o profesional, ejercida sobre la persona humana o sobre la comunidad o sobre ambas a la vez, que afecte directa e inmediatamente a la posibilidad del libre perfeccionamiento y desarrollo integral del hombre , es decir, a la posibilidad de su plena y libérrima realización personal, posibilidad en cuya garantía se cifra precisamente el imperativo de la justicia social”³

En el ámbito nacional Carlos Parodi Trece también acota sobre la definición de Política Social lo siguiente:

“No resulta simple esbozar una definición de las políticas sociales; en principio, podrían conceptualizarse como aquellas que tienen como objetivo solucionar el problema social de un país, entendido éste como la existencia de un gran sector de la población en situación de pobreza”⁴ no obstante a reglón seguido acota que “ (....)esta definición es muy simple: por un lado, porque las políticas sociales por sí solas no pueden

³ Manuel Moix Martínez, Op. Cit, pg. ,86

⁴ Carlos Parodi Trece. Economía de las Políticas Sociales. Universidad del Pacífico Centro de Investigación. Tarea Asociación Gráfica Educativa, 2002, pg.,23

solucionar el problema de la pobreza; y, por otro, porque éstas no sólo involucran a los pobres”⁵

El mismo Carlos Parodi señalaría luego lo siguiente: “En la visión tradicional, la política social es llevada a cabo por el Estado, quien financia, diseña, supervisa y evalúa los programas sociales. Este esquema hace crisis por la falta de una burocracia eficiente y moderna y por la casi nula participación de los beneficiarios directos en los aspectos enumerados líneas atrás. A esto habría que agregarle la restricción de recursos fiscales de la década de los ochenta, que obligó a buscar fuentes complementarias de financiamiento dentro de la misma comunidad receptora.”⁶ Agregando “Lo nuevo en política social consiste en incorporar a nuevos agentes, como las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) o algunas instituciones privadas, que pueden encargarse de la prestación del servicio social. Esto no implica la supresión del Estado, quien mantiene un rol importante en la dirección de la política social, pero que ya no ejerce un poder monopólico sobre la misma. Inclusive deberá encargarse de la provisión en aquellas actividades en las cuales los otros agentes sociales no cumplan esa tarea. La idea es, pues, transferir ciertas etapas de la implementación de las políticas al sector privado. Un ejemplo ilustrativo lo constituye el surgimiento de las Administradoras Privadas de los Fondos de Pensiones (AFPs).”⁷

Sin embargo el ejemplo puesto por Carlos Parodi Trece así como el planteamiento sustentado por él carece de firmeza por cuanto señala como nuevo planteamiento para la política social la referencia al crecimiento económico como solución o sustento, volviendo en este sentido a los viejos conceptos de economista Simón Kuznets para quien el crecimiento económico bastaba para disminuir la desigualdad,

⁵ Ibidem, pg. 23

⁶ Carlos Parodi Trece, Op.Cit. pag. 28

⁷ Carlos Parodi Trece, Op.Cit. pag. 29

asimismo el ejemplo planteado de las AFP como “ejemplo ilustrativo” de la nueva visión de Política Social, resulta desde todo punto de vista equivoco ya que como bien es conocido en el medio el fondo que se crea con las AFP no garantiza una pensión mínima para quienes pertenecen al fondo privado y es mas se está generando un problema a futuro ya que las AFP no garantizan las inversiones que ellas realizan pese a las altas tasas que cobran por su administración, careciendo de todo sentido social dicha administración de fondos, y resultando más bien un negocio privado en el cual los afiliados no pueden reclamar absolutamente nada del cómo se invierten los fondos, ni menos de las elevadas comisiones que cobran las AFP aun sin resultados favorables, por lo menos en la practica en el Perú hasta la fecha que se realiza el presente trabajo, habiéndose generado cuantiosas pérdidas en los últimos años que a la larga implicaran la precariedad de las que otorgaran en el futuro ya que el trabajador aportante solo tiene garantizado recibir un ingreso hasta que el fondo se acabe.

Por todas estas razones el ejemplo planteado por Parodi Trece resulta lo opuesto a lo que se puede entender por Política Social y más bien se aproxima más al concepto de negocio privado en base a temas sociales, como es el caso de las pensiones de jubilación que promueven las AFP en el Perú.

Julio Gamero Requena en su trabajo denominado Políticas Sociales Post- Keynesianas (Después del Ajuste: ¿Qué modelo?) señala lo siguiente “En el marco del nuevo paradigma emergente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y del dominio del pensamiento keynesiano, el bienestar empieza a ser entendido de una forma más compleja. Ya no se concibe, tan sólo, como resultante del crecimiento económico. Se legitima la intervención del Estado a través de políticas redistributivas, es decir, de políticas sociales. En este

sentido, si una marca de origen tienen las políticas sociales, es el sello keynesiano”⁸

En el mismo trabajo Julio Gamero detalla la tesis del desarrollo como producto del crecimiento en los siguientes términos: “Según el planteamiento de Kuznets, en los tramos iniciales del crecimiento económico de los países, cuando la renta per cápita es baja, y luego si cuando esta comienza a crecer, dicha trayectoria va acompañada de un aumento de la desigualdad. Sin embargo, en una parte de esa senda de crecimiento económico, la desigualdad se estanca no crece más y en la medida que ese crecimiento económico continúa, dicha desigualdad, que había venido aumentando, disminuye.”⁹ Acotando a continuación: “En consecuencia, según este planteamiento conocido como el de la U invertida de Kuznets-, la idea fuerza es que el crecimiento económico basta para reducir la desigualdad, y que esta acompaña, necesariamente, los tramos iniciales del crecimiento económico.”¹⁰

Agrega Julio Gamero en su trabajo antes citado “En América Latina, la adopción del paradigma del Estado de Bienestar, no fue necesariamente acompañado del mantenimiento de los equilibrios económicos fundamentales, como es el caso, por ejemplo, del equilibrio fiscal. Muchas de las políticas expansivas acabaron generando un desorden económico y crisis recurrentes, para finalmente expresarse en los procesos de hiperinflación, que acompañaron a países como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.”¹¹ Sobre este punto Gamero detalla lo siguiente: “Frente al desorden económico, de inestabilidad social y de crisis de gobernabilidad, el país dominante, en este caso Estados Unidos, impondría un paradigma alternativo que buscaba “ordenar” las

⁸ Julio Gamero Requena. Políticas Sociales Post-Keynesianas(Después del Ajuste:¿Qué modelo?). Biblioteca virtual. Clacso. Org.Argentina, 2009, pg.,85

⁹ Julio Gamero Requena. Op.Cit, pg.,86

¹⁰ Ibidem, pg.,86

¹¹ Julio Gamero Requena. Op.Cit, pg.,87

economías de la región. Desde la economía y el mercado se pretendía “ordenar” igualmente, la política y la sociedad.”¹²

Añadiendo Julio Gamero que “Estos planteamientos dieron forma a lo que en su momento se llamó el Consenso de Washington. Consenso que, por lo demás, no lo fue tal, ya que sus recomendaciones fueron producto de la interacción de círculos académicos conservadores norteamericanos en coalición con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.”¹³

Asimismo señala Gamero que “Este cambio de paradigma marcó un giro sustantivo en la política de una centralidad de la acción estatal hacia una centralidad del mercado.”¹⁴

Posteriormente al referirse sobre los límites de las nuevas políticas sociales y la persistencia de la pobreza en el mismo trabajo Gamero acotaría lo siguiente: “Bajo el paradigma del Estado de Bienestar; las políticas sociales no podían ser sino universales, es decir; para todos. Aunque en muchos casos sólo lo fueran en el discurso, como ya se ha señalado. Bajo el paradigma del Consenso de Washington, las políticas sociales no van a ser universales. Serán políticas sociales de corte selectivo, focalizado, buscando concentrar los recursos del Estado en los denominados grupos vulnerables, grupos en situación de riesgo, es decir; la población localizada bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema. Con lo cual, también el discursos de la lucha contra la pobreza sustituirá a la preocupación por el desarrollo y la desigualdad social.”¹⁵

Finalmente concluye Gamero en esta parte de su trabajo que “Transcurridos más de diez años del dominio de este nuevo paradigma, que en muchos casos tuvo pretensión de ser el pensamiento único, no

¹² Ibidem, pg.,87

¹³ Ibidem, pg.87

¹⁴ Ibidem, pg.87

¹⁵ Julio Gamero Requena, Op.Cit.,pg.,88

obstante se aprecia que el panorama en la región no ha cambiado sustantivamente en términos de la población bajo la línea de pobreza.”¹⁶

En nuestra opinión luego de analizar los distintos planteamientos entendemos por Política Social los grandes lineamientos estratégicos, de planificación, y legales generados desde el Estado y mediante los cuales procura no solo el bienestar y la inserción social del conjunto de la población que habita en el territorio nacional que por diversas razones pueda resultar excluida sino también y principalmente la política social construye una ciudadanía activa y en consecuencia una democracia más sólida y real.

Como señala Adriana Delgado Gutiérrez “(...) es sabido que las desigualdades de bienestar determinan y refuerzan las desigualdades en el ejercicio de la democracia”.¹⁷ Asimismo nos adscribimos a la posición que entiende que la Políticas Sociales únicamente corresponden al Estado, es decir tomas de decisión del Estado orientadas a aumentar directamente el bienestar de la población, insertando económica y socialmente a aquellos sectores de la población que resultan o podrían resultar excluidos y de esta manera asegurar la construcción de una ciudadanía activa que a su vez genere una democracia más sólida y real como líneas arriba hemos precisado.

En tanto los Programas Sociales son la instrumentalización y operatividad sistemática de esas estrategias, normas y leyes en que se expresa la Política Social. Los Programas Sociales son acciones concretas cuya finalidad es materializar los grandes lineamientos estratégicos de las Políticas Sociales dirigiéndose a la población a fin de satisfacer las necesidades existentes tanto a nivel individual como social traduciéndose en acciones que generan soluciones y que finalmente

¹⁶ Ibidem, pg.88

¹⁷ Adriana Delgado Gutiérrez. Las Políticas Sociales en Perspectiva de los Derechos y la Justicia. CEPAL. Bogotá, 2002, pg.,2

buscan el bienestar de la población en su conjunto, situación que permite a su vez construir una ciudadanía activa.

Los Programas en medios como el nuestro se asocian a ayudas asistenciales dirigidas a las poblaciones más pobres, no obstante a la luz de los fenómenos que se desarrollan al interior del Estado y de la dinámica de la vida social misma y de la diversidad de requerimientos de la sociedad se deben considerar de manera más amplia a efectos de conseguir el bienestar común, igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida en general.

De esta manera el tema de los programas sociales, sin dejar de atender las necesidades más urgentes de la población en situación de pobreza o pobreza extrema, deben establecerse alrededor de temas de más amplio espectro como son la educación, salud, empleo, justicia entre otros requerimientos, orientada a incorporar a un mayor número de pobladores que por diversas razones encuentren limitada su inserción económica y social y de esta manera contribuir a forjar una ciudadanía activa, que a su vez genere una democracia real, efectiva y participativa.

El Estado y su Rol de Administrador de Justicia en los Estados Democráticos de Derecho.

El Estado moderno se conformó entre los siglos XV y XVI, al desplazarse ciertas funciones básicas que antes eran ejercidas por diversos estamentos, a manos de una autoridad central, en consecuencia el Estado adquirió un poder monopolizador de la coerción material, como bien señala Vladimiro Naranjo Mesa en su libro Teoría Constitucional e Instituciones Políticas cuando detalla:

“Una de estas funciones era la de la protección y seguridad de los asociados, la cual se logra mediante los sistemas de coerción material: ejércitos, armamentos, policía, cárceles, jueces y tribunales. Así, una de

las características esenciales del poder público en el moderno Estado de derecho es el de detentar exclusivamente los medios de coerción, con lo cual se garantiza que las reglas de derecho sean cumplidas por todos los asociados”¹⁸.

En base a lo planteado líneas arriba solamente el Estado puede tener fuerzas armadas y, por otro lado **el Estado es el único autorizado a administrar justicia**. Las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad tales como los tribunales y juzgados, son instituciones políticas que forman parte del poder público en consecuencia su formación, estructura, funciones deberían estar consagradas con rango Constitucional.

Asimismo Naranjo Meza señala en su obra “(...) el Estado no debe tolerar la existencia de grupos o sectores armados, por fuera de los ejércitos y demás instituciones regulares. La existencia de grupos paramilitares, o de autodefensa, o de cuadrillas armadas, implica una amenaza contra la estabilidad institucional y un reto al Estado de derecho”¹⁹

Es bien entendido que en un Estado de Derecho por principio nadie puede hacerse justicia por su propia mano, esto es la función jurisdiccional está en manos del Estado y nadie más que este es quien puede administrar justicia.

La separación de funciones entre los órganos del Estado es esencial para la conformación de un Estado de Derecho así la existencia de tribunales colegiados y jueces independientes que pueden ejercer control jurídico sobre los actos de los gobernantes así como resolver con arreglo a derecho los conflictos que se suscitan entre los particulares o entre estos y el Estado. Como resultado de la división de poderes es a

¹⁸ Vladimiro Naranjo Mesa. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2000 Octava Edición, pg. 132

¹⁹ Ibidem, pg. 132

los tribunales a quienes corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional.

Naranjo Meza refiere asimismo sobre la justicia lo siguiente “En la historia del pensamiento la palabra justicia ha sido utilizada en dos sentidos de diferente alcance: para designar el criterio ideal del derecho, es decir, la idea básica sobre la cual debe inspirarse este, y para denotar la virtud universal, comprensiva de las demás virtudes.”²⁰

Agregando luego: “Los pitagóricos fueron los primeros que intentaron definir conceptualmente la justicia, reduciéndola a una relación de igualdad. Concibieron la justicia como una medida y quisieron determinarla en forma matemática: consideraron el cuadrado geométrico como imagen de la justicia, porque tiene cuatro lados iguales.”²¹

De otro lado señala Naranjo Meza que “Para Platón la justicia es la virtud fundamental de la cual se derivan todas las demás, pues constituye el principio armónico ordenador de estas, el que determina el campo de acción de cada una de las otras virtudes, como la prudencia, la sabiduría, la fortaleza, la templanza.”²² Asimismo anota que “Aristóteles usa igualmente la palabra justicia como expresión de la virtud total, de la cual dice que consiste en una medida de proporcionalidad de los actos.”²³

El mismo Naranjo Meza adicionalmente precisa que “En Roma, Ulpiano la definió como *ius suum quique tribuere* (dar a cada cual lo suyo), sentencia que se refiere a un criterio material de medida; su derecho. Para Cicerón la justicia es algo que debe realizarse en la sociedad humana y que consiste en atribuir a cada uno lo suyo, y se aplica también a la distribución, de modo que cada cual reciba lo que

²⁰ Vladimiro Naranjo Mesa.Op.Cit.,pg.276

²¹ Ibidem,pg.,276

²² Ibidem,pg.,276

²³ Ibidem,pg.,276

corresponde a su mérito o dignidad; es decir, coincide con los principios de equidad.”²⁴

Naranjo Meza señala que “En los Evangelios la idea de justicia como valor superior aparece también consignada al igual que en el pensamiento de los padres de la Iglesia: San Agustín, la hace consistir en el amor de Dios y del bien, suma y compendio de toda virtud que establece para cada cosa su propio grado de dignidad, que subordina el alma a Dios y el cuerpo al alma y que además señala un orden en los asuntos humanos. Para, Santo Tomás de Aquino la justicia también es entendida como el dar a cada cual lo que se merece.”²⁵

Por otro lado Naranjo Meza puntualiza que “La doctrina aristotélica reapareció en la mayor parte de los autores del Renacimiento y de los siglos XVI, XVII y XVIII, como Bodin, Grossio, Vico, Wolff, Beccaria, Pufendorf, etc.”²⁶

Agregando Naranjo Meza que: “Para Groccio la Justicia es definida como equivalencia o proporcionalidad en los cambios y distribución; en tanto Beccaria la define como la determinación de convivir con los prójimos de tal manera que todos disfrutemos de la dignidad que acarrea el status de hombres y, como determinación de edificar una ciudad de pares, donde la coexistencia resulte equitativa tal como sería definida la felicidad terrenal. David Hume concibe a la justicia como una convención que plantea la premisa que cada acto singular es realizado con la expectativa de que los otros realizarán lo mismo. Para Rousseau, el primer sentimiento de la justicia no nos viene de la que nosotros debemos sino de la que nos es debida, y se dimensiona por las capacidades –el aporte – y por las necesidades – el reparto justo - . Del Vecchio sostiene que la justicia resulta ser el principio ético que determina la perfección del ordenamiento jurídico, exige que todo sujeto

²⁴ Ibidem,pg.,276

²⁵ Ibidem,pg.,276

²⁶ Ibidem, pg.,276

sea reconocido en aquello que vale y que a cada uno le sea atribuido aquello que le corresponde.”²⁷

A lo largo del devenir histórico del pensamiento tal como se puede desprender de los diversos conceptos antes citados y desde las distintas vertientes la Justicia ha sido conceptualizada como un valor superior para la convivencia humana, como virtud esencial, como principio básico, en torno al cual debe girar el derecho. El cómo se administre justicia, por quienes ejercen esta facultad, dependerá esencialmente, la existencia de un Estado de Derecho real, situación que da lugar a instituciones sólidas y democráticas así como la convivencia armónica y civilizada de los ciudadanos que conforman esa sociedad.

En nuestro país el tema Justicia y Administración de Justicia son temas sensibles a la población y no en vano se han intentado una serie de sucesivas reformas en el Poder Judicial a efectos de conseguir mejoras en el tema, no obstante es poco lo que se ha avanzado, habiendo algunos autores como Luis Passara quien ha señalado que “El nudo central de esa problemática (refiriéndose al problema de la justicia en el Perú) reposa sobre la relación entre la administración de justicia y el poder.”²⁸

El mismo Passara en su libro Jueces, justicia y poder en el Perú precisa que “Transformar la justicia requiere ventilarla, sacarla de un encierro que la ha distanciado de todo criterio razonablemente aceptable por la población”.²⁹

Passara anota más adelante en su estudio “Pese a las frustrantes experiencias que le puedan significar a un ciudadano pobre el comparecer ante la justicia en procura de un derecho, es innegable, además, que en muchos casos obtendrá algo de lo que solicitaba,

²⁷ Ibidem, pg.,276

²⁸ Luis Passara. Jueces, Justicia y Poder en el Perú. CEDYS, Industrial Gráfica. Lima, Perú, 1982, pg., 14

²⁹ Luis Passara. Op.Cit.,pg.,15

aunque su conquista sea mínima o efímera, o el precio pagado por ella resulte muy alto; más alto aun que el beneficio obtenido. Este hecho cierto promueve determinada aceptación de la justicia que, como efecto demostrativo, contribuye a la recepción por ella de nuevos casos.”³⁰

Es evidente que tanto la Justicia como tal y la Administración de Justicia resultan problemas pendientes de resolver en nuestro país. Estudios como el que de Luis Passara revelan la existencia de problemas mucho más profundos vinculados con el ejercicio del poder en el país, sin embargo como él mismo señala la población acude al Poder Judicial aun cuando no confíe en este órgano, a lo que agregamos que la población recurre a la vía judicial frente a la necesidad de conseguir la declaración de un derecho, denunciar una trasgresión al mismo o reclamar se establezca una determinada situación, por cuanto es la camino que está legitimado en los Estados de Derecho.

En la Constitución de 1993 el tema de la Justicia y Administración de Justicia es tratado principalmente en los artículos 138 y 139 en los siguientes términos:

“Artículo 138.- Administración de Justicia. Control difuso.

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”³¹

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia:

³⁰ Luis Passara. Op.Cit.,pg.,35

³¹ Constitución Política del Perú 1993

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a casusas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejarse sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
6. La pluralidad de la instancia.
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la Ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y del derecho consuetudinario.

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser

asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

- 15.El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
- 16.El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
- 17.La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
- 18.La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.
- 19.La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
- 20.El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
- 21.El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
- 22.El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.”³²

En el presente trabajo de investigación nos referiremos especialmente a lo regulado en el numeral 16 del artículo 139 de la Constitución Política

³² Constitución Política del Perú 1993

del Estado Peruano de 1993, así como el contenido de los algunos Tratados Internacionales en los que se hace referencia expresa al tema del Derecho de Defensa y la Defensa Gratuita o de Oficio a cargo del Estado como parte de los Derechos Humanos fundamentales, así como las diversas regulaciones vinculantes en materia de Administración de Justicia.

Políticas Sociales Universales o Focalizadas

Adriana Delgado Gutiérrez en su trabajo para la CEPAL denominado Las Políticas Sociales en la Perspectivas de los Derechos y la Justicia, señala que “La universalidad es uno de los principios fundamentales de la política social e implica la responsabilidad que tiene el Estado con todas las personas de garantizarles “el suministro adecuado de bienes meritorios, es decir, de aquellos bienes y servicios que son esenciales para el bienestar y participación en la vida democrática”³³

En tanto Carlos Parodi Trece precisa sobre políticas sociales focalizadas lo siguiente “por oposición a las políticas universales, pretende proveer servicios sociales subsidiados solo a la población-objetivo; quienes, además de ser pobres, tienen otras características de homogeneidad. Por ejemplo, el Programa del Vaso de Leche en el Perú focaliza la ayuda directa en los niños pobres menores de cinco años. La educación superior gratuita no es focalizada, pues está abierta a todos los que la deseen”³⁴.

Según Parodi Trece “La focalización aparece como una alternativa a la contracción de recursos fiscales en América Latina, no solo en épocas de crisis como la década de los ochenta”³⁵.

Coincidimos con la posición de Adriana Delgado Gutiérrez toda vez que nos adscribimos a la posición que entiende que las Políticas Sociales

³³ Adriana Delgado Gutierrez. Las Políticas Sociales en la Perspectivas de los Derechos y la Justicia. CEPAL, Bogotá ,2002, pg.4

³⁴ Carlos Parodi Trece. Economía de las Políticas Sociales. Universidad del Pacífico Centro de Investigación. Lima Perú.2002, pg. 32

³⁵ Ibidem, pg.,32

únicamente le corresponden al Estado quien debe garantizar los bienes y servicios que la población requiere para su adecuada participación social en democracia y en este sentido las políticas sociales deben ser universales especialmente si tenemos en cuenta la situación socioeconómica de nuestro país, la misma que queda retratada en algunos escritos como los realizados por Efraín Gonzales de Olarte cuando señala en su trabajo Crecimiento, desigualdad e ingobernabilidad en el Perú de los 2000: “La principal paradoja de la economía peruana es que crece en conjunto y, sin embargo, para la gran mayoría ese crecimiento no se siente en los bolsillos. Se trata de un crecimiento sin redistribución que ha creado una “falla social” que dificulta tanto el desarrollo económico como la gobernabilidad democrática.”³⁶

En el mismo documento Gonzales de Olarte señala “Si tomamos el problema distributivo desde la perspectiva del 54% de peruanos que está por debajo de la línea de la pobreza, observamos que la capacidad de compra de este grupo social, que es muy pequeña, tiene una estructura que privilegia alimentos, algo de ropa y muy pocos servicios. Su demanda está orientada a consumir productos provenientes de la agricultura tradicional, del sector informal o de algunos servicios del Estado. Estos sectores, en su conjunto, tampoco conmueven los fundamentos productivos y de productividad. En consecuencia, tampoco generarán mayores niveles productivos, empleo e ingresos. Es la trampa del equilibrio de bajo de nivel, equilibrio que solamente logra reproducir la pobreza.”³⁷.

En el antes citado estudio Efraín Gonzales de Olarte al plantear el cambio de percepciones para el desarrollo existentes en el país precisa entre otros planteamientos el siguiente: “Es necesario descosificar las

³⁶ Efraín Gonzales de Olarte. Crecimiento, desigualdad e ingobernabilidad en el Perú. (En: El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia. Editor Víctor Vich.) IEP Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Peru.2005.pg.,49

³⁷ Efraín Gonzales de Olarte.Op.Cit.,pg.,64

metas de desarrollo y poner a las personas como fin último. En otras palabras, en lugar de promover la competitividad a cualquier costo, es importante la promoción de la competitividad para el desarrollo humano, o sea, para aumentar la productividad y, al mismo tiempo, crear empleo y generar ingresos en función de los incrementos de la productividad.”³⁸

Planteamiento con el cual concordamos y de ahí que pensemos que las Políticas Sociales deben ser universales ya que pese a la publicitada disminución de la pobreza en las cifras publicadas por los entes oficiales en el país, en los últimos meses, lo que se refleja en las calles y pobladores del país revela una realidad distinta y lejana de las entusiastas cifras.

1.2 Formulación del Problema

El Programa de Defensa Pública en Lima 2009

El Programa de Defensa Pública es concebido bajo el marco de la Constitución de 1993 y de la Ley 29360 como un programa focalizado. El planteamiento inicial de la Constitución de 1993 y su regulación posterior a través de la Ley 29360 evidencia la tendencia hacia la focalización sin embargo las características socio-económicas de la población peruana y la dinámica social en la cual se desenvuelve el Programa de Defensa Pública así como los numerosos Tratados Internacionales a los cuales está sujeto el Estado Peruano (tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica) genera en la práctica que el programa de Defensa Pública que es objeto de estudio tenga como característica la predominancia de la Universalidad en su implementación y aplicación o desarrollo contra todo propósito de focalización del Programa.

³⁸ Efraín Gonzales de Olarte.Op.Cit.,pg.,69

Asimismo la existencia de los requerimientos de Justicia en nuestra población han quedado registrados en un sin número de conflictos sociales, situación que constituye uno de los problemas más serios en el país, asimismo estos requerimientos resultan bastante más complejos si se tiene en cuenta que la Defensa en el Perú es Cautiva, es decir que a efectos de acudir en diversas instancias en la vía judicial, la participación de abogados letrados es indispensable, salvo en las localidades o poblaciones donde existan menos de tres abogados y hasta ciertos niveles de la Administración de Justicias, donde la participación obligatoria de letrados no es indispensable, tales como los Juzgados de Paz no Letrados, motivo por el cual en el presente trabajo de investigación abordando la problemática existente sobre los requerimientos de Justicia en el país, se pretende establecer si el Programa de Defensa Pública del Ministerio de Justicia a través de la asesoría técnico legal que ofrece a los usuarios, así como a los resultados que obtiene si permite o viabiliza el acceso real y efectivo a la Administración de Justicia.

1.3 Justificación Teórica del Trabajo de Investigación

Los requerimientos de Justicia de la población en el Perú y el cómo accede a la Administración de Justicia, el Derecho de Defensa, el Estado y su Rol de Administrador de Justicia en los Estados Democráticos de Derecho, son los fundamentos a partir de los cual ubicamos la justificación teórica del presente trabajo de investigación ya que el mismo versa sobre Política Social en el Sector Justicia, es decir los grandes lineamientos establecidos desde el Estado, en materia de Acceso a la Justicia y el tema de Defensa Pública normado en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado Peruano de 1993 y regulado en la Ley 29360 publicada el 14 de mayo de 2009.

Al analizar “El Programa de Defensa Pública en Lima Metropolitana en el año 2009” nos centraremos en el cómo funciona el Programa y si éste

viabiliza o hace posible el acceso a la Administración de Justicia por parte de los usuarios que hacen uso del Programa.

1.4 Justificación Práctica del Trabajo de Investigación

En la práctica el trabajo de investigación resulta justificado en la medida que se debe investigar si el Programa de Defensa Pública viabiliza o no y en qué proporción en nuestra realidad social el acceso a la Administración de Justicia de aquellos que hacen uso del Programa.

El Estado ha planteado grandes líneas de acción en cuanto a coberturas de los requerimientos sociales en el Sector Justicia las mismas que se traducen en el plano concreto en Programas o Servicios Sociales, como el de Defensa Pública.

Al no existir estudios previos sobre el tema de las Políticas Sociales en el Sector Justicia así como tampoco existen estudios sobre la Defensa Pública o de Oficio en el presente trabajo de investigación desarrollaremos una aproximación teórica que nos proporcione conceptos claros y distintos sobre los temas tales como Política Social , Justicia y conceptos específicos del Programa de Defensa Pública como parte de implementación de las Políticas Sociales en el Sector Justicia.

De otro lado se ha realizado el análisis de una muestra de casos atendidos por los Defensores Públicos en los Juzgados de Familia Especializados en lo Penal ubicados en el Edificio Alzamora Valdez y en el Consultorio Jurídico ubicado en la cuadra 7 del Jr. Carabaya en el Cercado de Lima perteneciente a la Defensa Pública, término a emplearse desde el año 2009 ya que anteriormente era conocida como Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Conocer y determinar si el Programa de Defensa Pública implementado por el Ministerio de Justicia en Lima viabiliza el acceso a la Administración de Justicia a los usuarios del Programa mediante la asesoría técnico legal que imparte.

Objetivos Específicos

- a) Analizar si los usuarios del programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana son asistidos legalmente de manera adecuada y oportuna durante todo el proceso.
- b) Analizar si los usuarios del programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana obtienen resultados que den respuesta a sus requerimientos de justicia en los casos que son asistidos por los Defensores Públicos o de Oficio.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

Los intentos de modernización de los Sistemas Judiciales que en los últimos años en los países de América Latina y el Caribe se han desarrollado siguiendo una tendencia conceptual similar para la solución de problemas comunes, de esta manera son tratados con prioridad temas jurídicos al mismo tiempo que otros que involucran los ámbitos social y económico.

En este contexto de procesos denominados de Modernización del Estado se entiende que sin la existencia de un Estado de Derecho, no se puede germinar ni democracia ni desarrollo y por consiguiente, se puede considerar que las reformas que se buscan implementar en los Sistemas Judiciales para un perfeccionamiento en la Administración de Justicia de los países de la Región (América Latina y el Caribe) constituyen complemento necesario para la Modernización de los Estados involucrados.

Las reformas de modernización planteadas en los Estados de la Región se habían llevado a cabo en las últimas décadas abarcando principalmente a los poderes ejecutivo y legislativo dejándose al margen o considerándose de manera tangencial las transformaciones del Poder Judicial, no obstante los actuales procesos de modernización tienen un carácter más integral.

En el caso peruano la reforma del Estado desarrollada en los noventa estuvo enmarcada en la nueva Constitución Política de 1993, aun cuando esta Constitución no tuvo el consenso social requerido por cuanto el Régimen Fujimorista se encontraba inclinado notoriamente por un objetivo de continuidad en el gobierno pretensión que requería un nuevo texto constitucional adecuado a la línea trazada de perpetuación

en el poder, siendo este el contexto que precedió a la Carta Política de 1993, la misma que no obstante haberse sometido a referéndum no contó con el debate ni la transparencia necesaria.

Al respecto Enrique Bernales Ballesteros anotaría en su nota de autor a la cuarta edición de su libro La Constitución de 1993 lo siguiente: “El marco político de la Carta de 1993 es y ha sido un régimen autoritario, poco respetuoso de las reglas democráticas y proclive a quedarse en el poder, aun a costa del desconocimiento de las reglas que el mismo se dio”³⁹.

Volviendo la mirada hacia los países Latinoamericanos y del Caribe si bien el escenario político en donde se elaboran las Constituciones Políticas varían en cada caso, el rubro de los problemas existentes en los Sistemas de Justicia de nuestros países guardan situaciones comunes como los que anota Abraham Siles Vallejo⁴⁰ siendo algunos de los problemas más importantes los siguientes:

- Leyes y procedimientos arcaicos y engorrosos.
- Falta de independencia del Poder Judicial.
- Capacidad administrativa inadecuada de los Tribunales.
- Deficiente administración de los casos.
- Carencia de jueces y de otros recursos.
- Políticas y prácticas no competitivas del personal.
- Sistemas de control de gastos que carecen de transparencia.
- Capacitación y educación jurídica inadecuada.
- Débiles sanciones por conducta reñida con la ética.
- Un sistema de costas jurídicas que eleva el costo del acceso.
- Falta de mecanismos de alternativa de resolución de conflictos.

³⁹ Bernales Ballesteros, Enrique. La Constitución de 1993 (Análisis Comparado) Ed. Rao. 5ta Ed. 1999. Pg. 13.

⁴⁰ Siles Vallejos, Abraham. Modernización y Reforma de los Sistemas de Justicia en América Latina y El Caribe. Cuadernos de Debate Judicial. Vol. I. Consejo de Coordinación Judicial, Lima. Pg. 26

Dentro de las propuestas para revertir los problemas antes citados, esta las alternativas formuladas por Sharid Sabed Burki, quien puntualizó sobre el tema lo siguiente: “Una revisión de la experiencia tanto de los países industriales como de los países en vías de desarrollo revela varios elementos claves para cualquier esfuerzo de reforma judicial exitoso:

- Reforzar la independencia del Poder Judicial.
- Simplificar y actualizar las leyes y los procedimientos jurídicos.
- Mejorar la Administración de Justicia.
- Suministrar mecanismos alternativos para la resolución de diferendos.
- Mejorar la educación y la capacitación jurídica.
- Ampliar el acceso a la justicia.
- Mejorar la calidad de la profesión legal”⁴¹.

De otro lado cabe citar que en opinión de Edgardo Buscaglia “Los elementos básicos de una reforma judicial deben incluir, entonces mejoras en la administración de los tribunales y en la gestión práctica de los casos; la redefinición y/o expansión de los programas de educación legal y de preparación para estudiantes, abogados y jueces; mayores facilidades para el acceso del público a la justicia a través de programas de ayuda legal y una educación legal dirigida a fomentar la conciencia del público sobre sus derechos y obligaciones una vez que apelan a los tribunales; la disponibilidad de mecanismos alternativos para la resolución de disputas, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación; la existencia de una independencia judicial (autonomía presupuestaria, transparencia en el proceso de nombramientos y estabilidad laboral), que vaya emparejada con un sistema disciplinario transparente para los funcionarios de los tribunales; y la adopción de

⁴¹ Burky Shahid Javed. Desarrollo Económico y Reforma Judicial” Revista Banco Mundial, 1997. Washington D.C. Pg.11-12

reformas procesales donde sea necesario. Cada componente es una parte integral de la reforma en su conjunto”⁴².

Uno de los aspectos más importantes en los procesos de reformas de los Sistemas de Justicia de la Región está constituido por el tema de la mejora en el acceso a la justicia de la población en general.

En nuestros países como es bien conocido por todos, los costos de los procesos resultan excesivos y hacen que las personas de menores recursos económicos se resistan a acudir a los juzgados y tribunales de justicia, sobre este tema, estudios realizados llegan a la conclusión que “El acceso a la justicia también debe verse, por último en sus aspectos económicos, culturales y aun geográficos. (...) de otro lado con base a amplias muestras de casos judiciales ante los tribunales de primera instancia de Argentina, Ecuador y Venezuela muestran que la correlación estadística entre los ingresos familiares, el tiempo de los procedimientos y los costos de los litigios en las jurisdicciones laborales y civiles es significativamente negativa. Esto significa, sencillamente, que las familias de bajos ingresos tienden a experimentar retrasos más largos y costos más elevados en los tribunales laborales y civiles”⁴³.

Resultado de todo lo anteriormente referenciado es la notoria deficiencia del Sistema Judicial donde se continúan generando las desigualdades tal y como lo hiciera notar el investigador Hugo Eyzaguirre “(.....) con un marco institucional deficiente, solo una minoría puede participar activamente en los mercados. Las conexiones con miembros del gobierno o con funcionarios públicos y una mayor capacidad económica permiten a algunos obtener garantías que debieran ser provistas por el sistema judicial. La mayoría de la población en cambio, no recibe estas garantías, sus posibilidades de desarrollar actividades económicas se ven limitadas y, por consiguiente, no goza de los beneficios derivados

⁴² Buscaglia, Edgardo. Los principales obstáculos de la reforma judicial en América Latina y el Caribe” Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1997. Pg. 39

⁴³ Buscaglia, Eduardo. Op. Cit. Pg. 45

del mercado, particularmente en el contexto de una economía moderna dominada por transacciones inter-temporales e impersonales”⁴⁴.

En varios de nuestros países el proceso de reformas económicas y del Estado aun no permiten el ingreso masivo de los sectores más pobres al Sistema Legal, uno de los problemas más serios a los cuales se enfrentan los ciudadanos excluidos debido a su precaria economía es el acceso a los servicios de los profesionales.

Esto debido a los medios profesionalizados y especializados donde prima la defensa cautiva que como bien señalara el Dr. Aníbal Quiroga “(...) en un medio jurídico especial y especializado, profesionalizado, donde los agentes de justicia son iusperitos y donde la intervención de las partes está mediatizada por la defensa cautiva-intervención directa y obligatoria de los abogados la asistencia letrada a las partes en juicio termina siendo un elemento que incide en el derecho de defensa (.....)”⁴⁵

Entre los factores que impiden un menor costo de los servicios profesionales están: su obligatoriedad para ejercer la defensa; la fijación de tarifas mínimas por parte de los Colegios Profesionales; la desigual información entre defensor y defendido y la obligatoriedad de la colegiatura profesional.

En el caso del Perú, se han llevado a cabo algunos esfuerzos en los últimos años por mejorar el acceso a los servicios de atención legal a las poblaciones de menores recursos tales como el Programa de Defensa Pública, Consultorios Jurídicos Gratuitos, módulos básicos de justicia en localidades urbano-marginales y zonas de menor desarrollo.

En cuanto al marco legal este se ha adaptado a los Convenios suscritos por el Estado Peruano tales como El Pacto Internacional de Derechos

⁴⁴ Eyzaguirre, Hugo. Marco Institucional y Desarrollo Económico. La Reforma Judicial en América Latina. Año 1997. New York, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Pg. 101-130

⁴⁵ Quiroga León, Aníbal. Los Derechos Humanos, el Debido Proceso y las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia. En la Constitución de 1979 y sus Problemas e Aplicación. Cultural Cuzco S.A. Lima 1987. Pg.322

Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana de Derechos Humanos o también conocido como Pacto de San José, en estos instrumentos legales como ya lo señaláramos anteriormente se han consagrado derechos elementales tales como el derecho de defensa así como una serie de garantías con las que debe contar toda persona para garantizar un debido proceso. De esta forma la Constitución de 1993 en su artículo 139° inciso 16, precisa lo siguiente: "El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y para todos, en los casos que la ley señala"⁴⁶.

Sobre la gratuidad de la administración de justicia, Enrique Bernaldes precisa lo siguiente: "La gratuidad de la administración de justicia es, más bien, una garantía de carácter general que no necesariamente se condice con la realidad. Es sabido que para algunos trámites judiciales la ley manda cumplir con el pago de aranceles judiciales y otros desembolsos obligatorios"⁴⁷. No obstante la precisión efectuada por el Dr. Enrique Bernaldes hace sobre la gratuidad de la administración de justicia en el Perú, es también cierto que la Constitución al garantizar la gratuidad de la Administración de Justicia y la defensa gratuita para las personas de escasos recursos económicos y para todos los casos que la ley lo señale, convierte este derecho en un derecho de cumplimiento programático y que obliga al Estado a su implementación vía las Políticas Sociales que establezca para este fin.

⁴⁶ Constitución Política del Perú de 1993.

⁴⁷ Bernaldes Ballesteros, Enrique. Op. Cit. Pg.658

2.2 Marco Filosófico o epistemológico de la Investigación

Desarrollo Económico y Reforma Judicial

Los cambios que han tenido lugar entre los países de América Latina y el Caribe en los últimos años, han considerado entre otros temas la importancia del papel de las Instituciones Públicas (incluyendo el Poder Judicial) en el desarrollo de los países. En algún sentido esto implica un cuestionamiento directo a las Políticas basadas en un Estado Neutral, sin un rol preciso, para la obtención rápida de desarrollo económico.

Las Instituciones Públicas de la Región (América Latina y el Caribe) se encuentran en crisis no pudiendo por ello responder a las necesidades urgentes del desarrollo económico, entre las necesidades de primer orden se cuentan la pobreza, la escasez de recursos humanos, la debilidad de los mercados financieros así como inadecuados Servicios Judiciales.

Asimismo las Instituciones Públicas de la región tienen que responder a un cambiante medio ambiente externo, conformado por los nuevos acuerdos comerciales, la integración de los mercados financieros y la escasez de fondos para las naciones en desarrollo. En este sentido se señala la importancia del Estado como “facilitador y arbitro” del desarrollo del sector privado, muchos actores de la economía de los países de la Región reconocen que el suministro de un marco legal para el desarrollo constituye un papel central que solamente el Estado puede cumplir. Este enfoque del problema de los Sistemas Judiciales en América Latina y el Caribe fue expuesto en el marco de la Conferencia del Banco Mundial denominada Reforma Judicial en América Latina y el Caribe en 1997, exposiciones que quedaron recogidas en el documento de trabajo que se editó bajo el mismo nombre⁴⁸.

⁴⁸ Reforma Judicial en América Latina y el Caribe: Procedimientos de la Conferencia del Banco Mundial WH Malik, M Rowat y M Dakolias, Washington D.C. Estados Unidos N.A., 1997

De otro lado se desprende del trabajo al que se ha aludido líneas arriba, que los Sistemas Judiciales de la Región se caracterizan por su mal funcionamiento particularmente por: ineficiencias administrativas, tardanzas y dilaciones en la resolución de los casos necesarios para promover la actividad económica. Es por ello que los países de la Región están promoviendo reformas que incluyen medidas tales como: el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, simplificar y actualizar las leyes y procedimientos jurídicos, actualizar las leyes y procedimientos jurídicos, crear mecanismos alternativos para la solución de conflictos y ampliar el acceso a la justicia, todas estas medidas se orientan a mostrar estabilidad jurídica y confianza en el Sistema Judicial.

La importancia del Derecho y del Poder Judicial en los países de América Latina y el Caribe para encaminarse hacia un desarrollo económico y social sostenible es el tema que se ha puesto sobre el tapete en organismos como el Banco Mundial, de esta forma ha quedado establecido, que un marco legal solido y un Poder Judicial independiente son requisitos indispensables para el desarrollo económico y social, asimismo se afirma que “De particular importancia para el buen gobierno está el establecer un marco regulatorio y jurídico apropiado y el desarrollo de instituciones judiciales y del servicio civil honestos y competentes”⁴⁹.

Se entiende como un marco legal apropiado para el desarrollo como “aquel que consiste en reglas claras, procesos prácticos mediante los cuales se aplican estas reglas e instituciones capaces que apliquen en forma eficiente y equitativa las reglas y velen por su cumplimiento”.⁵⁰

Cabe señalar que la participación del Banco Mundial en estas reformas judiciales está limitada al papel que le toca como institución financiera de desarrollo. Dirige sus acciones sobre todo al financiamiento de los

⁴⁹WH Malik, M Rowat y M Dakolias, Op. Cit. Pg. 2

⁵⁰ Ibidem, Pg. 2

gobiernos para la elaboración de diagnósticos de instituciones jurídicas y préstamos para inversiones en el Sector Judicial.

En ese sentido se considera piedra fundamental a la observancia del imperio de la ley sobre la cual debiera construirse una economía sólida. Por ello llama la atención que se haya avanzado tan poco con respecto a los costos económicos del mal funcionamiento de un sistema jurídico. Sobre todo porque los altos costos judiciales dificultan el acceso mismo a la justicia de parte de las personas con menores recursos económicos, quienes afectarían sus precarias economías familiares si deben asumir los costos judiciales.

Esta dificultad de acceder a los servicios del Sistema Judicial también se presentan en los países desarrollados, en efecto, de acuerdo a una investigación realizada por el Dr. Steven Garber para los Estados Unidos de Norteamérica, considera “que existen costos tanto al interior como al exterior de un Sistema Judicial. Plantea como costos directos, el tiempo de los jueces, de los abogados y demandantes, así como también al espacio de los tribunales; como indirectos al incremento de los gastos de seguridad”.⁵¹

Por otro lado, dentro de los elementos esenciales en la Reforma Judicial está el acceso universal a la Justicia por parte de todos los ciudadanos de un país, situación que se tiene que enfocar desde distintas aristas y una de ellas es precisamente el Derecho a la Defensa y por ende en medios como el nuestro donde la intervención de las partes en la vía judicial se haya mediatizada a la intervención de abogados conocedores del derecho y por lo tanto resultando un requisito a cumplir a fin de no incurrir en una posición de indefensión, es que resulta importante el rol que cumple la Defensa Pública o de Oficio, por cuanto la contratación de un abogado privado por parte de los ciudadanos que son emplazados a juicio o que por diversas razones se ven inmersos ante los tribunales ya

⁵¹ WH Malik, M Rowat y M Dakolias, Op. Cit. Pg. 3

sea para solicitar se les declare un derecho, se resuelva una situación pendiente o responder alguna denuncia o demanda judicial, en ocasiones resulta imposible, debido a los elevados costos de la defensa y los magros ingresos que en promedio se obtienen en mercados laborales como el nuestro donde predominan condiciones como el desempleo y subempleo.

2.3 Bases Teóricas

Los Convenios Internacionales y el Derecho de Defensa

Dentro de las Bases Teóricas que se pueden encontrar a fin de explicar con mayor claridad el Programa de Defensa Pública en el presente trabajo de investigación está todo lo concerniente al Derecho de Defensa en especial el análisis de los Convenios Internacionales y de la Legislación Nacional vigente existente sobre el tema, así de esta manera procederemos a citar los principales Convenios Internacionales tales como:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos,
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

a. Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 10.-

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.-

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

Estos artículos destacan entre otros el principio básico que tiene toda persona del derecho a la defensa, esto implica que en la medida que en un Estado democrático de derecho trate de proteger a la persona del uso abusivo del poder, el ejercicio del ius puniendi está sujeto a límites democráticos que aparecen tanto en el momento de la creación de la norma, como en el momento de su aplicación. La aplicación de la norma debe darse bajo determinadas condiciones normativas que se denominan garantías de la persecución, procesales o condiciones del debido proceso y de ejecución. Sobre las garantías penales y procesales cabe señalar que son proposiciones prescriptivas y que por lo tanto, no describen lo que ocurre en el sistema penal, sino que prescriben lo que debiera ocurrir, constituyen por lo tanto en su conjunto una garantía jurídica para la afirmación de la responsabilidad penal y para la consecuente aplicación de una pena.

El proceso penal como lo señala el Profesor Juan Bustos Ramírez “debe realizarse bajo condiciones especiales de garantía. Estas condiciones especiales se formulan bajo el principio del proceso debido”⁵².

La responsabilidad penal significa exigencia de responsabilidad por parte del Estado a una persona por el hecho cometido, esto implica capacidad

⁵² Bustos Ramírez, Juan y Hernán Hormazábal Malarée. Lecciones de Derecho Penal. Editorial Trotta, Madrid, 1997, Pg.,87

de exigir a la persona un determinado comportamiento, una determinada conducta, el problema está en determinar si respecto de la persona en concreto el Estado puede exigir dicha responsabilidad, esto implica que estas personas no se encuentren marginadas o expuestas a la respuesta adoptada para la solución de un conflicto por el propio Sistema, asimismo el reconocimiento de la autonomía ética de la persona lleva al planteamiento de la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo que supone que la carga de la prueba de los hechos corresponde a la parte que sostiene la acusación, la presunción de inocencia es una presunción iuris tantum que requiere para ser desvirtuada una mínima actividad probatoria.

El principio in dubio pro reo obliga a absolver si no existe esa actividad probatoria, está vinculado desde esta vertiente a la presunción de inocencia el fundamento último está basado en que es preferible absolver al culpable que condenar a un inocente. Se entiende que la actividad probatoria debe desarrollarse en condiciones de legalidad esto significa que la prueba obtenida por medios ilegales constituye prueba nula.

Otro de los contenidos del derecho al debido proceso es la imparcialidad objetiva del juzgador. Un proceso con todas las garantías implica el derecho de las partes a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Una de las garantías más importantes es el derecho a un proceso público, excepcionalmente puede ser limitado por motivos previstos en la ley. La prohibición de indefensión constituye una garantía que ampara el ejercicio del derecho a la defensa en el curso del procedimiento.

El derecho de defensa como contenido del debido proceso supone la efectividad del derecho de defensa del imputado en todas las fases del

proceso, comprende el derecho a la asistencia de un letrado y a ser informado de la acusación.

El principio de igualdad de las partes significa que deben establecerse condiciones de igualdad entre la acusación y la defensa, los jueces deben promover estas condiciones, todos estos aspectos del debido proceso se encuentran explícita e implícitamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 aprobada por nuestro país mediante Resolución Legislativa No. 13282 del 09 de diciembre de 1959.

Posteriormente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con el propósito de desarrollar e implementar aún más sus alcances, han sido adoptadas, tanto a nivel mundial, como regional y nacional, por los Estados, otras trascendentales declaraciones de derechos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos algunos de cuyos artículos pasamos a detallar:

b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9.-

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La presión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia de acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro

momento de las diligencias procesales y, en su caso para la ejecución de su fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

Artículo 14.-

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informadas, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Artículo 15.-

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

En los artículos antes transcritos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional adoptado y abierto a la firma de ratificación o adhesión de los países miembros de Naciones Unidas por parte de la Asamblea General en su Resolución N° 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.

El mismo que fue aprobado por nuestro país mediante el Decreto Ley N° 22128 de fecha 28 de marzo de 1978. Contienen los artículos en comentario un detallado conjunto de normas que recogen el principio del debido proceso al igual que las normas citadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desprendiéndose de los artículos citados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que este

instrumento internacional ha recogido los axiomas básicos planteados en doctrina respecto del debido proceso tales como:

a) El nulla culpa sine iudicio que a su vez comprende:

- *El derecho a un proceso sin las dilaciones indebidas.

- *El derecho a un proceso con todas las garantías, esto relacionado con la imparcialidad objetiva del juzgador.

- * El principio de la publicidad del proceso, es decir, el derecho a un proceso público.

- * El derecho a la tutela judicial efectiva.

- * El derecho a interponer recursos ante el mismo juez o ante uno superior cuando se crea afectado o estime esta perjudicado por la resolución judicial.

- * El derecho a la ejecución de las sentencias, esto es a ejecutar lo juzgado, a obtener efectivamente lo decidido judicialmente.

b) El nulla iudicio sine accusatione que recoge el principio acusatorio es decir, que se requiere de la existencia de una acusación formal para que haya un juicio.

c) El nulla accusatio sine probatione comprende el principio de presunción de inocencia, supone que la carga de la prueba de los hechos delictivos corresponde a la parte que sostiene la acusación.

d) El nulla probatio sine defensione dentro de este axioma están recogidas las garantías que se detallan a continuación:

- * Prohibición de indefensión.

- * Derecho a la defensa.

- * Principio de igualdad de las partes.

Como se ha señalado al inicio del análisis de los artículos pertinentes para el presente trabajo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este instrumento legal internacional ha plasmado en los artículos 9°, 14° y 15° los axiomas planteados en doctrina para el estudio del debido proceso como institución reconocida y validada por los Estados que se asumen así mismos como Estados Democráticos de Derecho.

Especial mención tiene el contenido de los incisos a), b) y d) del artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda vez que en ellos se detallan los derechos que tiene el acusado de estar debidamente informado, es decir, que se le presente en detalle la naturaleza y causa de la acusación que se le imputa y que además esté expresada en su idioma o en uno que conozca, sobre el tema existen legislaciones que contemplan la ayuda de un intérprete o traductor para subsanar el impase que se presenta cuando quien es acusado y procesado desconoce el idioma del lugar donde será juzgado.

La preparación de la defensa a la que se hace mención en el inciso b) del artículo 14 está referida a que el acusado debe disponer de todos los elementos que le permitan preparar su defensa de manera adecuada es decir que cuente con el tiempo, los medios y abogado defensor de su elección.

En el inciso d) del antes citado artículo 14° se menciona el derecho a la autodefensa que algunos códigos contemplan extensamente y el derecho de tener un defensor de oficio siempre que el interés de la justicia así lo exija. En efecto una gran parte de los códigos del mundo, contemplan que para que en la realidad se dé el presupuesto que las personas de un país o región se encuentren en condiciones cercanas a la igualdad ante la ley, las distintas situaciones económicas, en extremo opuestas deberán ser compensadas por el Estado, pudiéndose entender los servicios del abogado de oficio como una obligación del Estado a la

persona cuando ésta carezca de los recursos para contratar uno sin poner en peligro su propia subsistencia o la de su familia.

c. Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 7.-Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ésta decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estado partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.

Artículo 8.- Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente la culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) Derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) Comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;

c) Concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) Derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) Derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior.

En el mismo sentido de los artículos de los dos primeros tratados bajo análisis, los artículos antes detallados correspondientes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita por el Gobierno del Perú el 27 de julio de 1977, aprobada mediante Decreto Ley No. 22231 de fecha 11 de julio de 1978 abordan en esencia los puntos principales del debido proceso.

La Legislación Nacional

1. La Constitución Política del Perú de 1993 y el Derecho de Defensa.

En la Constitución de 1993 se han agrupado bajo la denominación de Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional en el artículo 139° un conjunto de normas referentes a la Función Jurisdiccional, a diferencia de la Constitución de 1979 en la que se legisló sobre la materia en el artículo 233 bajo la nomenclatura de Garantías de la Administración de Justicia.

El artículo 139° a la letra prescribe lo siguiente:

Artículo 139.-

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

6. La pluralidad de la instancia.

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

12. El principio de no ser condenado en ausencia.

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada.

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y para todos, en los casos que la ley señala.

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a la ley.

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no haya sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley.

Este artículo bastante extenso y complejo en su análisis aborda una serie de normas en las que subyace el debido proceso en armonía y concordancia con los instrumentos internacionales a los cuales se ha adherido el Perú vía la suscripción de los mismos de esta forma en el numeral 1) tenemos expuesto el tema del derecho al juez natural, que “en términos concretos es aquel magistrado que goza de jurisdicción y competencia para avocarse al conocimiento de un proceso”⁵³. Este concepto del juez natural que tiene que ver con el tema de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional constituye un concepto básico de las garantías constitucionales y equivale a que “nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Esta actividad le corresponde al Estado a través de sus órganos especializados; éste tiene la exclusividad del encargo. El principio

⁵³ Bernal Ballesteros Enrique, Op.Cit.Pg.,636

significa, además, que si una persona es emplazada por un órgano jurisdiccional, debe someterse necesariamente al proceso instaurado contra él. Es más para cuando el proceso acabe, dicha persona estará también obligada a cumplir con la decisión que se expida en el proceso del cual formó parte. En cualquiera de ambos casos, ni su actividad ni su omisión podrá liberarla de la obligatoriedad de cumplir con lo que se decida. Podrá ser compelida a ello, por medio del uso de la fuerza estatal.”⁵⁴

A través de la Constitución se ha establecido la conformación unitaria del Poder Judicial es decir, se prohíbe la instauración de fueros privativos, sólo se admiten como fueros distintos del Fuero Ordinario, por vía de excepción el Fuero Militar; y la Jurisdicción Arbitral.

El numeral 2) contiene una norma que se hace imprescindible en todo Estado de Derecho tal es la autonomía del Poder Judicial, esta resulta una garantía de primer orden en todo Estado de Derecho, respecto a la independencia de los órganos judiciales ha precisado el profesor Juan Monroy Gálvez que es “la única posibilidad de que un órgano jurisdiccional –un juez- pueda cumplir a cabalidad con su función social de resolver conflictos de intereses y procurar la paz social (...) intentando que su actividad no se vea afectada por ningún otro tipo de poder o elemento extraño que presione o altere su voluntad, es decir la facultad de decidir”⁵⁵.

Como bien señala el Profesor Enrique Bernales con relación a la independencia de la función jurisdiccional “ (...)se debe entender la independencia del Poder Judicial no solamente debe ser un bien redactado precepto constitucional. Antes bien, es en el ejercicio concreto de la función jurisdiccional, en el manejo autónomo de la estructura orgánica y, fundamentalmente, en la autonomía de decisión de los

⁵⁴ Monroy Galvez, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Temis, Santa Fe de Bogota, Colombia. 1996. Pg.81

⁵⁵ Ibidem, Pg.,81

magistrados, donde se comprueba si efectivamente existe independencia.”⁵⁶

Otro principio de la función jurisdiccional tratado en el numeral 2) del artículo 139º bajo comentario es el de la cosa juzgada, es decir que esta como concepto implica que lo decidido por el juez para poner fin a determinado conflicto asegure a las partes una solución cierta del interés en disputa equivale a que la resolución final no puede ser dejada sin efecto por autoridad alguna, esta prohibición se hace extensible a los procedimientos en trámite con excepción de la amnistía que pueda dictar el Congreso de acuerdo a sus facultades. En relación al derecho de investigación del Congreso contemplado en el numeral 2) debe precisarse que este derecho no debe interferir el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno de esta forma la facultad investigativa del congreso es más bien de carácter político y ético y sus conclusiones no conllevan ningún ejercicio jurisdiccional aun cuando ellos puedan promover la intervención del aparato jurisdiccional en los casos que amerite.

El numeral 3) en forma expresa detalla el debido proceso, el mismo que constituye en la actualidad uno de los derechos humanos fundamentales. A través del debido proceso se garantiza que las reglas de organización judicial, competencia, trámite de los procesos y ejecución de las decisiones de la administración de justicia se desarrollen respetando las garantías legales vigentes.

El Profesor Bernal, precisa con relación al Debido Proceso que “la observancia del debido proceso legal es una garantía reconocida a nivel supranacional. En efecto tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

⁵⁶ Bernal Ballesteros, Enrique, Op.Cit.Pg.,640

Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos la contemplan de manera explícita.”⁵⁷

Finalmente en el numeral 3) bajo comentario hace referencia expresa a la jurisdicción predeterminada, esto equivale a que para cada proceso iniciado, no interesa el tipo que tenga, existe un procedimiento específico de cuyos márgenes el juzgador está impedido de salirse, teniendo el justiciable (quien recurre a la justicia) la certeza de que el proceso se desarrollará en una vía conocida, en una jurisdicción predeterminada con jueces competentes.

El numeral 4) del artículo 139º nos remite a otro de los principios básicos tal es el de publicidad de los juicios al respecto se señala que “la actividad procesal es una función pública, en virtud de la cual, constituye una garantía de su eficiencia que los actos que la conforman se realicen en escenarios que permitan la presencia de quien quiera conocerlos. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la comunidad de que su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad y de transparencia. Por ello, no hay mejor medio de convertir en actos públicos todas sus actuaciones. Este conocimiento por parte de los justiciables de la actividad judicial, les concede la seguridad de que el servicio se brinda correctamente.”⁵⁸

Lo que la publicidad permite es acercar a conocimiento público la actuación de los órganos jurisdiccionales es decir, de quienes tienen a cargo en el Estado la Administración de Justicia, esto se justifica ya que se puede mediante esta vía establecer opinión por parte de la sociedad que a su vez actúa como testigo imparcial de dichas decisiones. En nuestro país incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial consagra el principio de publicidad.

⁵⁷ Bernal Ballesteros, Enrique. Op.Cit.,Pg.,642

⁵⁸ Monroy Galvez, Juan. Op. Cit. Pg.,84

El numeral 5) del artículo 139° hace referencia a la obligación de los órganos administradores de justicia de motivar las Resoluciones Judiciales en todas las instancias y esto debido a que las citadas resoluciones cumplen diversas funciones además de la principal de todas que es resolver un conflicto por ello se precisa que las partes reciban la información clara y precisa del porque se resolvió el conflicto en un sentido u en otro.

Adicionalmente, a lo que se ha señalado la importancia de la motivación de las Resoluciones Judiciales radica en que constituyen antecedentes para casos futuros, sirven como elemento formativo e instructivo dentro del derecho y como aplicación concreta de la legislación para un caso en particular ayudan a formular un juicio sobre la adecuación o no de la legislación a la realidad nacional esto teniendo en cuenta que en nuestro país gran parte de la legislación nacional corresponde a adaptaciones o copias de legislaciones extranjeras.

En el numeral 6) del artículo 139° se establece otra garantía fundamental cual es la pluralidad de instancia que implica que la decisión de los jueces y tribunales es pasible de una posterior revisión ante instancia superior constituye un acto voluntario del justiciable, es decir, hay libertad de impugnación.

El numeral 7) del artículo 139 se hace mención al derecho a la indemnización que tiene toda persona en caso de error judicial, detenciones arbitrarias sin perjuicio de la responsabilidad a las que hubiere lugar correspondiendo su aplicación netamente al ámbito penal y esto debido a que es en este medio en el que se presentan casos de errores judiciales que afectan al procesado conduciendo en algunas ocasiones dichos errores a condenas injustas. En los más importantes tratados internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos se ha

dejado establecido el derecho a la indemnización a las víctimas de los atropellos para el caso de detenciones arbitrarias o inmotivadas.

Los numerales 8) y 9) del mismo artículo 139 se refieren a los principios de tutela jurisdiccional efectiva, esto es que el juez siempre debe otorgar la tutela sin que pueda eximirse por ausencia de la norma material que permita resolver el conflicto debiendo para este efecto recurrir a los principios generales del derecho o en su caso al derecho de la costumbre. Asimismo se establece la limitación en materia penal y en las normas que restrinjan derechos donde bajo ninguna circunstancia se aplicara la analogía. La ley penal se rige por el principio de legalidad que establece que no existe delito sin pena sin ley previa, esto equivale a que los contenidos de las normas penales escritas son de carácter cerrados donde no se puede aplicar similitudes ni consideraciones especiales que lleven a determinar como criminal una conducta que no fue prevista previamente por la ley como delito.

Los numerales 10), 11), 12) y 13) del artículo 139° nos remiten a principios importantes dentro del debido proceso tales son el principio de no ser penado sin proceso judicial, el de la retroactividad benigna en materia penal y el de no poder ser condenado en ausencia en el primer caso se establece que toda persona debe ser juzgada por un tribunal imparcial antes de ser condenada, es decir no hay pena sin juicio previo.

La aplicación de la retroactividad benigna en materia penal está garantizada en este numeral en nuestra constitución toda vez que el catálogo de conductas criminales es establecido por opción legislativa en función de los bienes jurídicos que se estiman valiosos en el momento cautelar para la convivencia social, no obstante el cambio y evolución de las circunstancias pueden modificar esa opción legislativa descriminalizando una conducta o imponiendo una sanción menor, razón por la cual debe estarse a los beneficios de las nuevas normas para el caso de las pensiones cuyas conductas inicialmente hayan verificado los

supuestos modificados por el legislador. El principio de no ser condenado en ausencia tiene como base el que el procesado haga uso del derecho de defensa en juicio a efectos de establecer las garantías de equidad y justicia buscando su aplicación en esencia respaldar la legitimidad del Sistema de Administración de Justicia.

Finalmente, el numeral 13) precisa la prohibición de revivir procesos fenecidos con Resolución Ejecutoriada, se refiere en estricto al concepto de cosa juzgada ya que la resolución ejecutoriada forma parte de la cosa juzgada, esta prohibición establece la imposibilidad de examinar una cuestión ya decidida aun cuando esa decisión sea injusta, esta exigencia de la seguridad jurídica que debe haber en toda sociedad está fundada en el hecho que no se perpetúen los pleitos y que los derechos sean ciertos y estables una vez obtenido el pronunciamiento por parte del Estado.

Los numerales 14), 15) y 16) son importantes en el presente trabajo de investigación ya que estas normas se refieren de manera precisa y expresa al Derecho de Defensa, a la Detención Motivada y la Gratuidad de la Administración de Justicia.

Antes de referirnos a la normatividad nacional vigente en materia de Defensa Pública haremos una reseña sobre los antecedentes existentes de la misma.

La Defensa de Oficio llegó al Perú en la época de la Colonia como institución traída por los conquistadores españoles con el fin de garantizar la defensa de los pobres, obteniendo a cambio honores y exoneraciones tributarias. En materia penal hasta antes de 1940 en el Perú la defensa de oficio estaba librada a un régimen de gratuidad, a un desprendimiento por parte de los letrados y por lo general apenas si se ocupaban de cumplirla rechazando en ocasiones su nombramiento. Es en el año 1940 que mediante el Código de Procedimientos Penales (Ley

N° 9024) se incorpora la Defensa de Oficio como institución gratuita a cargo del Estado, la misma que hasta 1996 estuvo circunscrita al ámbito de las salas penales. No obstante en los juzgados existía un gran número de personas sin defensa, por lo que vía Decreto de Urgencia N° 082-97 se posibilitó la contratación de un gran número de defensores de oficio a efecto de que se encarguen de la defensa en los juzgados penales. Asimismo su radio de acción se ha extendido, en 1992 luego de la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes, se proporcionó defensa de oficio a los menores infractores. Ese mismo año la legislación antiterrorista ordenó la asistencia en estos casos del Defensor de Oficio asignado por el Ministerio de Justicia. Se estimo también pertinente que en las grandes áreas policiales tales como la Dirección Nacional de Terrorismo, la Dirección contra las Drogas y la Dirección de Investigación Criminal existan Defensores de Oficio.

La Defensa de Oficio se considera como una institución de naturaleza pública cuyo objetivo es velar porque se haga justicia en condiciones de igualdad, permitiendo que las personas de menores recursos puedan ejercer su Derecho de Defensa.

La Defensa de Oficio es interpuesta aún por encima de la voluntad del reo, es un acto que dispone el juez en mérito a su investidura y por imperativo de la ley. Esta designación se produce cuando el procesado aún no ha designado un defensor.

Dentro de los fundamentos para la existencia de abogados de oficio a cargo del Estado está el hecho que resulta evidente que aquel procesado que no cuente con asesoría calificada técnica de un letrado por razones ya sea de no contar con los recursos económicos suficientes para poder pagar uno de su elección sin poner en peligro su subsistencia o la de su familia, se encontrará en una situación de indefensión, de desventaja en un medio como el nuestro donde la asistencia legal en juicio es obligatoria. Esta posición dará lugar a que no

se concrete en la realidad el principio del debido proceso, no existiendo por lo tanto la certeza de imparcialidad en el juicio, ni se habrán respetado las más mínimas de las condiciones para presumir la buena marcha del proceso ni menos aún se habrá respetado el derecho a la igualdad de las personas ante la ley, ni menos aún se confiara en el resultado del juicio que se emita por carecer de un requisito esencial cual es el Derecho de Defensa.

Con la Institución de la Defensa Pública o de Oficio a cargo del Estado Peruano se trata de reducir en el país las diferencias existentes en materia económica garantizándose en buena medida que se verifique en la realidad el principio de igualdad ante la Ley de las partes que intervienen en un proceso.

El 14 de mayo del 2009 se publicó la Ley 29360, denominada Ley del Servicio de Defensa Pública.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 29360 tiene como objeto regular el marco jurídico del Servicio de Defensa Publica en los aspectos referentes a la finalidad, principios, funciones, modalidades, condiciones de prestación, organización y acceso al Servicio

Asimismo se señala en su artículo segundo que el Servicio de Defensa Publica tiene la finalidad de asegurar el derecho de defensa proporcionando asistencia y asesoría técnico legal gratuita, en las materias expresamente establecidas, a las personas que no cuenten con recursos económicos y en los demás casos en que la ley expresamente así lo establezca.

Como principios generales de la Defensa Pública la Ley 29360 dispone lo siguiente:

El Servicio de Defensa Publica se presta en condiciones de efectividad, eficacia y calidad a favor de los usuarios y se rige por los siguientes principios:

a) Probidad

El defensor público actúa a favor de los intereses del usuario, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento, en todo momento, de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, especialmente los referidos a la protección de los derechos humanos. Deben, además, desempeñar su labor de manera eficaz, permanente, continua y técnica.

b) Independencia funcional

La defensa pública es ejercida con libertad y autonomía. En el ejercicio de sus funciones, el defensor público actúa según su criterio técnico, no pudiendo recibir presiones o instrucciones particulares para un caso.

Las instrucciones generales que dicte la Dirección General de Defensa Publica del Ministerio de Justicia se imparten únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el acceso a la justicia y mejor organización del sistema de defensa.

c) Confidencialidad

El defensor público debe guardar reserva o secreto de la información revelada por los usuarios o por terceros con ocasión del ejercicio de la defensa. La información así obtenida solo puede revelarla con el consentimiento previo de quien se la confió.

Excepcionalmente, puede revelar aquella información que permita prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro.

d) Unidad de actuación

El defensor público presta su servicio de manera continua y sin interrupciones, desde el inicio del caso hasta su conclusión definitiva, salvo razones de fuerza mayor.

Cuando hubiera conflicto de intereses en la defensa en un mismo proceso o desavenencia con el usuario, este o el defensor público pueden solicitar el cambio de designación.

e) Gratuidad

La defensa pública es un servicio que se presta en forma gratuita para quienes acrediten que no cuentan con recursos económicos y en los demás casos que la Constitución Política del Perú y la ley lo establezcan.

f) Desconcentración

El Servicio de Defensa Pública se organiza de manera desconcentrada, manteniendo una visión sistémica e integral.

g) Diversidad cultural

El Servicio de Defensa Pública se brinda respetando la naturaleza multiétnica y pluricultural de la Nación peruana.

En el artículo 5 de la Ley 29360 se dispone como funciones del Servicio las siguientes:

Las funciones del Servicio de Defensa Pública son las siguientes:

- a) Brindar asesoría y defensa gratuita a quienes no cuenten con recursos para contratar una defensa privada.
- b) Establecer los mecanismos de verificación de la capacidad socioeconómica de los usuarios del Servicio.

- c) Diseñar y mantener programas de información al público sobre los derechos de las personas y las garantías constitucionales, así como las condiciones y modos para acceder al Servicio.
- d) Organizar el sistema de selección y designación de los defensores públicos y defensores públicos adscritos.
- e) Las demás que deriven de la naturaleza de sus funciones, establecidas en el reglamento de la presente Ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Defensa Publica, promueve la celebración de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas.

El artículo 8 de la Ley hace referencia a los Servicios que presta la Defensa Pública en los siguientes términos:

La Dirección General de Defensa Publica brinda los siguientes servicios:

- a) La defensa penal pública, que brinda asesoría y patrocinio legal a las personas investigadas, denunciadas, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en procesos penales, incluyendo a los adolescentes infractores de la ley penal.
- b) Los consultorios jurídicos populares, que brindan asesoría y patrocinio legal a las víctimas de violencia familiar, violencia sexual, abandono moral y material, y a favor de los niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas que resulten agraviados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y la familia; y a las personas de escasos recursos económicos en materia de Derecho Civil y Familia, según las condiciones establecidas en el reglamento de la presente Ley.

En el artículo 10 de la Ley se establecen los requisitos para ser defensor público dentro de los cuales se detallan los siguientes:

Para ser defensor público se requiere lo siguiente:

- a) Ser abogado con colegiatura hábil.
- b) Tener experiencia profesional no menor de dos (2) años, contados desde su colegiatura.
- c) No encontrarse incurso en ninguna incompatibilidad para ejercer la función pública.
- d) Hablar, en las zonas donde predominen, quechua, aymara o las demás lenguas aborígenes, según la ley.
- e) No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
- f) No contar con antecedentes penales.
- g) Las demás que sean inherentes al cargo y que estén establecidas en el reglamento de la presente Ley.

El artículo 12 establece los deberes del Defensor Público en los siguientes términos:

Los deberes del defensor público son los siguientes:

- a) Ejercer la defensa de manera técnica, idónea y oportuna.
- b) Asumir inmediatamente, con atención y diligencia, la representación legal encargada y no abandonarla hasta que se asegure un reemplazante.
- c) Coadyuvar a la defensa de los derechos fundamentales y garantías procesales de sus representados e interponer los recursos y acciones de garantía que estime pertinentes, dando cuenta a la Dirección General de Defensa Pública.
- d) Guardar la reserva o el secreto profesional.
- e) Orientar al usuario en el ejercicio de su defensa material.
- f) Fundamentar técnicamente los recursos, acciones o informes que presente a favor de los usuarios.
- g) Mantener permanentemente informados a sus patrocinados sobre todas las circunstancias del proceso.

- h) Observar en todo momento una conducta recta, guiada por los principios de probidad, lealtad y buena fe.
- i) Las demás que sean inherentes a su función y que estén establecidas en el reglamento de la presente Ley.

El artículo 14 precisa quienes son los beneficiarios del servicio de Defensa Pública detallándose lo siguiente:

El servicio de Defensa Pública se presta a favor de las personas de escasos recursos económicos que requieran defensa o asistencia jurídica, en los supuestos del artículo 8.

También se presta en los supuestos de defensa necesaria regulados por las normas procesales cuando el procesado no cuente con abogado o haya renunciado a la defensa y lo requiera el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.

Sobre la Gratuidad del Servicio el artículo 15 de la Ley 29360 establece lo siguiente:

El servicio de Defensa Pública es gratuito para las personas de escasos recursos económicos, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14. Para tal efecto, se entiende que una persona tiene escasos recursos económicos cuando no puede pagar los servicios de un abogado privado sin poner en peligro su subsistencia o la de su familia.

Se presume que una persona tiene escasos recursos económicos cuando:

- a) Se encuentra desempleada o no tiene empleo o trabajo conocido.
- b) Percibe, por cualquier concepto o modalidad, ingresos mensuales inferiores a una remuneración mínima vital.

Dicha presunción no es aplicable cuando del análisis de su situación económica se desprende que cuenta con patrimonio suficiente para solventar los costos de una defensa privada.

Las acciones, demandas o recursos que presentan los defensores públicos a favor de los usuarios se encuentran exonerados del pago de cualquier tasa o pago de arancel.

En relación a la verificación de la situación socioeconómica del usuario el artículo 16 dispone lo siguiente:

Para verificar la condición socioeconómica del beneficiario, es suficiente la presentación de la constancia expedida gratuitamente por las entidades públicas y privadas dedicadas a programas sociales, asistencia social o defensa de los derechos fundamentales, sin perjuicio de mecanismos de verificación aleatoria y fiscalización posterior que establezca el Ministerio de Justicia.

Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, el Servicio de Defensa Pública se presta de forma inmediata, sin esperar los resultados de la verificación.

2.4 El Programa de Defensa Pública.

Con el objeto de describir y explicar una determinada realidad, tal como es el caso del Programa de Defensa Pública desarrollado en Lima Metropolitana durante el año 2009 hemos formulado conceptos teóricos y variables que hemos considerado relevantes para nuestra investigación.

De esta manera en la encuesta diseñada a fin de averiguar la realidad así como la opinión de los usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana contienen preguntas de identificación tales como sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil, grado de instrucción, ocupación, que tienen por objeto conocer las características que tiene el

grupo humano que hace uso de los servicios de los Defensores Públicos en la ciudad de Lima por otro lado también se han formulado preguntas que procuran recoger los hechos sobre la Defensa Pública y preguntas de información y opinión de los usuarios respecto del Programa, todos estos elementos nos ayudan a explicar que ocurre en la realidad concreta con la hipótesis de trabajo planteada sobre si el Programa de Defensa Pública a través de la asesoría técnico legal y a los resultados que obtiene viabiliza el acceso a la Administración de Justicia de los usuarios del Programa.

En esencia para que una medición sea científicamente de utilidad tiene que ser fiable y válida. La fiabilidad está relacionada con la calidad de los datos obtenidos. Cuando los datos obtenidos resultan fiables esta sola constatación no resulta en que los datos sean válidos. La validez de los datos está determinada cuando estos miden exactamente lo que uno quiere medir. En el presente trabajo de por ejemplo, se quiere estudiar cómo opera en la realidad el Programa de Defensa Pública en Lima Metropolitana, esto es, si efectivamente se cumple con brindar la asesoría legal a quienes lo requieren y si esta viabiliza o no el acceso a la administración de justicia de los usuarios.

Resulta razonable por ejemplo preguntar a la gente que ha requerido los servicios del Programa de Defensa Pública y para ello también será de utilidad hacer preguntas que nos lleven a determinar que características tienen los usuarios del Programa y qué clase de servicio reciben. De no realizarse así, no se estaría midiendo por ejemplo que características tienen quienes hacen uso del Programa, ni en condiciones se ofrece el mismo, sólo se estaría midiendo con qué frecuencia las personas hacen uso del Programa de Defensa Pública, y esto en nada nos serviría para contrastar nuestra hipótesis de trabajo.

Esto es uno puede haber obtenido datos fiables sobre cuántas personas han hecho uso de los servicios del Programa de Defensa Pública en

Lima en un período de tiempo determinado, pero dichos datos serían insuficientes para estudiar cómo se desarrolla en realidad el Programa de Defensa Pública en Lima.

2.5 Definición de Términos

a) Derecho de Defensa

Es un derecho humano fundamental, de rango constitucional en nuestro país cuyo desconocimiento invalida el proceso, atribuido a toda persona que consiste en poder ser oídas, poder alegar y demostrar sus respectivos argumentos en todo proceso o investigación preliminar ello supone la necesidad de que conozcan y puedan rebatir todos los elementos materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial.

b) Defensa Cautiva

Se entiende por Defensa Cautiva a la situación que se da en medios jurídicos especializados y profesionalizados donde la intervención de las partes está mediatizada por la intervención directa y obligatoria de abogados. Es decir la asistencia letrada a las partes en un juicio termina siendo elemento esencial en el derecho de defensa ya que su ausencia determina una desigualdad procesal y propicia la indefensión.

c) Defensa Pública

Es aquella que ofrece el Estado y que consiste en proporcionar la asistencia y asesoría técnico legal gratuita en las materias expresamente establecidas y dirigida a las personas de escasos recursos así como a todas las personas en general en todos los casos que la ley fija de manera obligatoria.

d) Defensor Público o Defensor de Oficio

Es el abogado designado como tal por el Ministerio de Justicia a efectos de asumir inmediatamente con atención y diligencia la representación legal del procesado y que está a cargo desde el inicio y no podrá abandonar al mismo sino hasta que se designe un reemplazante.

e) Debido Proceso

El principio del debido proceso constituye uno de los límites del *jus puniendi* más ampliamente reconocidos en la aplicación de la norma, el proceso debe realizarse bajo condiciones especiales de garantía. Estas condiciones especiales se formulan a fin de garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas de los que es titular la persona en un Estado Social y Democrático de Derecho.

f) Acceso a la Administración de Justicia

Es la situación que se presenta cuando se recurre a la vía judicial frente a la necesidad de: conseguir la declaración de un derecho, denunciar una transgresión al mismo, reclamar se establezca una determinada situación, responder a una denuncia o emplazamiento formulado.

g) Asistencia Técnico Legal

Consiste en servicios de asesoría proporcionados por letrados en derecho, esto es abogados debidamente titulados y acreditados ante los colegios profesionales, cuya actividad está orientada a la defensa de sus patrocinados, a la consejería legal, a la declaración de derechos de sus defendidos ante las autoridades pertinentes, a la denuncia de transgresiones de derechos de sus patrocinados, al reclamo del establecimiento de una determinada situación a favor de sus asesorados. En resumen toda actividad que implique asesoría de carácter legal proporcionada por abogados a quienes requieran de sus conocimientos y servicios.

h) Resultados del Proceso

Para efectos del presente trabajo se entiende por resultados del proceso cualquier respuesta obtenida del órgano jurisdiccional (Poder Judicial), del órgano administrativo o de la autoridad competente en relación a los requerimientos planteados por los usuarios del Servicio de Defensa Pública a fin de conseguir la declaración de un derecho, denunciar la transgresión al mismo, reclamar se establezca una determinada situación, responder a una denuncia, etc.

i) Convenios y Tratados Internacionales

Se entiende por Convenios y Tratados Internacionales a las negociaciones firmadas por representantes plenipotenciarios designados por el Jefe de Estado, que es el único que internacionalmente puede obligar a la Nación y que es su representante en sus relaciones internacionales.

Se negocian y forman con otros Estados o con organismos internacionales. Los Tratados no tiene fuerza obligatoria sino por los actos formales de la aprobación y de la ratificación posteriores.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 HIPÓTESIS

3.1.1 Hipótesis General

El Programa de Defensa Pública del Ministerio de Justicia a través de la asesoría técnico legal adecuada y oportuna que brinda así como mediante los resultados que obtiene en los procesos en los que intervienen viabilizan el acceso a la Administración de Justicia de los usuarios del Programa.

3.1.2 Hipótesis Específicas

a) Si los usuarios del programa de Defensa Pública son asistidos legalmente de manera adecuada y oportuna durante todo el proceso entonces los Defensores Públicos viabilizan el acceso a la Justicia de la población.

b) Si los usuarios del programa de Defensa Pública obtienen resultados favorables en los procesos en los que son asistidos legalmente por los Defensores Públicos entonces los requerimientos de justicia por parte de los usuarios resultan atendidos.

3.2 Diseño y Tipo de Investigación

El diseño de la investigación comprende:

- La relación entre hipótesis y objetivos.
- La selección en una población y muestra.
- Clasificación de datos.
- Análisis de datos.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se desarrollará será el descriptivo, explicativo en el cual se buscará relacionar la variable dependiente e

independiente y explicar las causas que originan una determinada conducta o resultado.

3.3 Población y Muestra

a) Población

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en el trabajo que hemos desarrollado se trata de explicar la realidad del Programa de Defensa Pública desarrollado en Lima Metropolitana durante el año 2009, para lo cual se debe tener en cuenta al grupo humano que hizo uso de los servicios de los Defensores Públicos o Defensores de Oficio en la ciudad de Lima durante el citado período. Ahora bien como el trabajo de investigación se delimitó geográficamente en Lima Metropolitana se tuvieron en cuenta a los usuarios del Programa de Defensa Pública en los Juzgados de Familia Especializados en lo Penal que se encuentran ubicados en la sede del Edificio Alzamora en el Parque Universitario, donde el Ministerio de Justicia tiene asignados Defensores Públicos y asimismo a los usuarios del Consultorio Jurídico Gratuito de Lima ubicado en la cuadra 7 del Jr. Carabaya donde también el Ministerio Público tiene asignados dos Defensores Públicos que brindan asesoría en materia de juicios de alimentos, rectificaciones de partida, regímenes de visitas, sucesiones intestadas, inscripción de partidas, juicios de filiación entre otros.

La Población en el presente estudio comprende a mil (1000) casos que a su vez se traducen a mil personas que han hecho uso de los Defensores de Oficio o Defensores Públicos en Lima Metropolitana durante el año 2009, se tomo este número debido a que consultados los Defensores de Oficio al respecto sobre la población que hace uso de los servicios del Programa estos estimaron que es alrededor de unos 1,000 casos que estaban en curso en las oficinas del Programa de Defensa Pública en Lima Metropolitana durante el año 2009.

b) Muestra

La muestra en el presente estudio es una porción del total de la población que hizo uso de los servicios de los Defensores Públicos o Defensores de Oficio en la Lima Metropolitana durante el año 2009, esto es del Universo de 1,000 casos en curso se tomo una muestra que comprende a 286 casos, lo que determina que se trate de una muestra representativa de una población finita con un margen de error de +, -5% de acuerdo a la Tabla de Fisher-Arkin Colton. Tables for Statisticians”⁵⁹

3.4 Variables

Las variables representan un concepto de vital importancia dentro del trabajo de investigación, las variables se refieren a propiedades de la realidad que varían, es decir la idea contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno.

Hipótesis General

1° Variable Dependiente.- El Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana

1°Variable Independiente.-La asesoría técnico legal ofrecida por el Programa de Defensa Pública

2°Variable Independiente.-Los resultados favorables obtenidos en los procesos en los que intervienen los Defensores Públicos.

⁵⁹ Avila Acosta, Roberto B. Introducción a la Metodología de la Investigación (La Tesis Profesional) Estudios y Ediciones, Lima Perú. 1997 Apéndice.

1era. Hipótesis Específica

1° Variable Dependiente.-El Programa de Defensa Pública del Ministerio de Justicia

1° Variable Independiente.-La atención técnico legal a los usuarios del programa de Defensa Pública.

2° Variable Independiente.-Desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio

2da. Hipótesis Específica

1° Variable Dependiente.- La Defensa Pública en Lima

1° Variable Independiente.-Los resultados que los usuarios del programa de Defensa Pública obtienen en los casos que son asistidos por los Defensores Públicos.

2° Variable Independiente.-Posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general.

3.5 Técnicas e instrumentalización de Recolección de Datos.

En esta parte se consideran todas las técnicas de las que haremos uso a fin de recolectar información, entre las que se cuentan: Las encuestas realizadas a los usuarios del Programa de Defensa Pública, las Entrevistas realizadas a los Defensores Públicos, asimismo los instrumentos a utilizarse como son los cuestionarios elaborados para la encuesta y la entrevista, finalmente el análisis bibliográfico.

3.5.1 Tipos de Técnicas e Instrumentos a utilizar

a) Encuesta

Esta técnica consiste en obtener información de los mismos usuarios con el fin de apreciar las condiciones y características del servicio que reciben por parte del Estado en materia de asistencia técnico legal a través del Programa de Defensa Pública.

b) Entrevista

Esta técnica consiste en obtener información mediante preguntas realizadas a los abogados que actúan como defensores públicos dentro del Programa de Defensa Pública en Lima Metropolitana.

c) Instrumentos.

En cuanto a los instrumentos a utilizarse en el presente trabajo de investigación a efectos de la recolección de datos que contribuyan a probar las hipótesis planteadas y de esta manera cumplir los objetivos señalados, hemos considerado la elaboración de un cuestionario para la realización de las encuestas a los usuarios del servicio de Defensa Pública, el citado cuestionario consta de un conjunto de preguntas a ser respondidas por los encuestados. De esta manera se diseñó un cuestionario con un total de doce (12) preguntas, fuera de las preguntas de identificación o datos del encabezado. Las preguntas que se formularon son de carácter cerrado, es decir el entrevistado deberá escoger sólo una de las respuestas elaboradas con antelación.

Asimismo, se elaboró un segundo cuestionario a fin de realizar una entrevista a ocho (08) de los Abogados de Oficio o Defensores Públicos, constando el cuestionario de seis (06) preguntas de identificación o de encabezado y cinco aspectos temáticos, el formato fue de carácter abierto, es decir cada entrevistado pudo expresar sus opiniones, las citadas entrevistas tuvieron lugar al final de la jornada laboral, toda vez

que tenían por objetivo conseguir que los entrevistados conversen libremente sobre el tema de Defensa Pública, sobre los usuarios del servicio, las condiciones en las que trabajan, las expectativas que genera su labor y el cómo perciben la Justicia en el país entre otros asuntos.

d) Análisis bibliográfico

Esta técnica consiste en el análisis de los diversos libros, revistas, artículos periodísticos, normas legales, convenios y tratados Internacionales, estudios previos a nivel doctrinal, estudios comparados y toda información relevante.

3.5.2 Criterios de validez, calidad y confiabilidad de los instrumentos y/o técnicas.

a) Validez

Debido a que el tema que es materia del presente trabajo de investigación no contaba con estudios anteriores, en un principio tuvo un carácter exploratorio, pasando luego a una investigación de carácter descriptivo a través de la cual se busca comprender cómo funciona el Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana.

Asimismo en razón que se ha empleado la escala nominal, los valores obtenidos no se pueden definir en coeficientes, por lo tanto todos los coeficientes están basados en una comparación entre frecuencias. En la información obtenida adicionalmente a la comparación entre frecuencias como técnica para validar los datos también se ha empleado las técnicas estadísticas de la moda y el rango o recorrido.

b) Calidad

La información tendrá un margen de error de 5% y un grado de confiabilidad del 95% por cuanto se maneja información obtenida del trabajo de campo y la proveniente del Ministerio de Justicia.

3.5.3 Procedimientos para la recolección de datos

- a) Elaborar las preguntas de la encuesta
- b) Diseñar las preguntas de la entrevista
- c) Seleccionar el material bibliográfico

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados Descriptivos.

El presente trabajo de Investigación tiene por objetivo describir el Programa de Defensa Pública como parte de la Política Social en el Sector Justicia, es decir el cómo se da en la realidad el Programa, con esta finalidad se ha procedido a desarrollar la investigación del Programa de Defensa Pública desarrollado en Lima durante el año 2009.

Encuesta

I. Ficha Técnica

La Encuesta para este efecto se desarrollo en los Juzgados de Familia Especializados en lo Penal que se encuentran ubicados en la sede del Edificio Alzamora en el Parque Universitario, lugar donde el Ministerio de Justicia tiene asignados Defensores Públicos o también conocidos como Defensores de Oficio a fin de brindar asesoría jurídica durante todo el proceso a los menores infractores, a su padres, familiares o tutores según sea la situación de cada uno de los procesados.

Asimismo la Encuesta también se aplicó a los usuarios en el Consultorio Jurídico Gratuito de Lima Metropolitana sito en la cuadra 7 del Jr. Carabaya donde el Ministerio de Justicia tiene asignados dos Defensores Públicos que brindan asesoría en materia de juicios de alimentos, rectificaciones de partida, regímenes de visitas, sucesiones intestadas, inscripción de partidas y juicios de filiación.

La Encuesta para la presente investigación fue desarrollada durante el año 2009.

Población y Muestra

Como se ha señalado en el capítulo precedente se ha considerado una población o universo de mil (1,000) casos de usuarios del Programa de Defensa Pública en Lima Metropolitana, específicamente en los Juzgados de Familia Especializados en lo Penal que se encuentran ubicados en la sede del Edificio Alzamora en el Parque Universitario, donde el Ministerio de Justicia tiene asignados Defensores Públicos y a los usuarios del Consultorio Jurídico Gratuito de Lima ubicado en la cuadra 7 del Jr. Carabaya donde también el Ministerio Público tiene asignados dos Defensores Públicos.

La muestra aleatoria que se tomó para la encuesta comprende a doscientos ochenta y seis (286) casos, lo que determina que se trate de una muestra representativa de una población finita con un margen de error de +, - 5% de acuerdo a la Tabla de Fisher-Arkin Colton. Tables for Stadisticians”⁶⁰

N= 1,000 (tamaño de la población)

n = 286 (tamaño de la muestra)

$N/n = 1,000/286 = 3.4965$ esto significa que cada elemento de la muestra representa 3.4965 elementos de la población.

De las preguntas de identificación y de hecho solicitadas en la encuesta formulada para el presente trabajo de investigación se pueden describir los siguientes:

1. Sexo.-De los 286 entrevistados 114 (40%) fueron del Sexo Masculino y 172 (60%) de sexo femenino, siendo en su mayoría los entrevistados del Sexo Masculino los menores infractores, y los usuarios del Consultorio Jurídico Gratuito de Lima Metropolitana

⁶⁰ Avila Acosta, Roberto B. Introducción a la Metodología de la Investigación (La Tesis Profesional) Estudios y Ediciones, Lima Perú. 1997 Apéndice

ubicado en la cuadra 7 del Jr. Carabaya, también se encuentran entre la minoría de los entrevistados del Sexo Masculino los padres, abuelos o tutores de los menores infractores. En tanto que las entrevistadas de Sexo Femenino fueron las madres, abuelas, hermanas, tías, primas, madrinas, tutoras de los menores infractores quienes se apersonaban a las instalaciones del Poder Judicial a averiguar por la suerte de los menores procesados asimismo entre las entrevistadas de Sexo Femenino se encuentran las usuarias del Consultorio Jurídico Gratuito de Lima Metropolitana antes citado.

2. Edad.-Otro dato solicitado fue la edad de los entrevistados, si eran menores de edad, estos están en el rango de a partir de 12 años hasta los 17 años y fueron un total de 93 (32.52%) entrevistados. En tanto que mayores de edad es decir a partir de los 18 años fueron un total de 193 (67.48%) entrevistados.
3. El Lugar de Nacimiento de los entrevistados fue otro dato solicitado, habiendo encontrado que 183 (63.99%) entrevistados había nacido en Lima y 103 (36.01%) había nacido en provincias y departamentos diferentes de Lima.
4. Estado Civil.-Se preguntó sobre el Estado Civil de los entrevistados las respuestas dadas arrojaron los siguientes resultados: Solteros 93 (32.52%); Casados 21 (7.34%); Viudos 4 (1.40%); Divorciado 0; Conviviente 72 (25.17%); Separado 96 (33.57%).
5. Nivel de Instrucción.-Otro de los datos solicitado a los entrevistados fue su nivel de instrucción, habiendo obtenido los siguientes datos Educación Primaria Incompleta 35 (12.24%); Educación Primaria Completa 58 (20.28%); Educación Secundaria Incompleta 83 (29.02%%); Educación Secundaria Completa 53 (18.53%);

Educación Técnica 36 (12.59%); Educación Universitaria 21 (7.34%).

Preguntas y Respuestas

Se formularon a los 286 encuestados un total de doce preguntas las mismas que fueron planteadas a través de un cuestionario, sobre aspectos vinculados a los Defensores Públicos o de Oficio a cargo del Ministerio de Justicia así como sobre el Derecho de Defensa. El cuestionario con las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas en la encuesta fueron los siguientes:

- 1.- **¿Considera que los servicios brindados por los Defensores Públicos o de Oficio para su propia defensa o la de su hijo o pupilo o dependiente le permitieron el acceso a la Administración de Justicia, entendiéndose por esta la posibilidad de iniciar o contestar o defenderse en un Proceso Judicial?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	260	90,91	90,91	90,91
	No	26	9,09	9,09	100,00
	Total	286	100,0	100,0	

- 2.- **¿Considera que el Defensor Público o de Oficio lo asistió legalmente durante todo el proceso?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	262	91,61	91,61	91,61
	No	24	8,39	8,39	100,00
	Total	286	100,0	100,0	

- 3.- **¿Cómo califica el desempeño del Defensor de Oficio durante el seguimiento del proceso hasta el presente momento?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy Bueno	69	24,13	24,13	24,13
	Bueno	152	53,15	53,15	77,28
	Regular	50	17,48	17,48	94,76
	Pésimo	5	1,75	1,75	96,51
	No Sabe/ No Opina	10	3,49	3,49	100,0
	Total	286	100,0	100,0	

- 4.- **¿Considera que los resultados del proceso hasta el momento de la presente encuesta podrían calificarse de qué manera?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy Favorable	30	10,49	10,49	10,49
	Favorable	153	53,50	53,50	63,99
	Regular	70	24,47	24,47	88,46
	Desfavorable	23	8,04	8,04	96,50
	Muy Desfavorable	10	3,5	3,5	100,0
	Total	286	100,0	100,0	

- 5.- **¿Considera que la publicidad existente sobre el Programa de Defensa Pública en Lima es adecuada?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	26	9,09	9,09	9,09
	No	231	80,77	80,77	89,86
	No sabe/ No opina	29	10,14	10,14	100,00
	Total	286	100,0	100,0	

- 6.- **¿Consideraría recomendar a alguien que se encuentre en la misma situación que usted, los Servicios de un Defensor Público o De Oficio?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	241	84,26	84,27	84,27
	No	9	3,15	3,15	87,42
	Tal vez	18	6,29	6,29	93,71
	No sabe/No opina	18	6,29	6,29	100,00
	Total	286	100,00	100,00	

- 7.- **¿Conoce de que entidad dependen administrativamente los Defensores Públicos en nuestro país?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	35	12,24	12,24	12,24
	No	251	87,76	87,76	100,0
	Total	286	100,0	100,0	

- 8.- **¿Considera que los Defensores Públicos cuentan con experiencia suficiente para realizar sus funciones?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	255	89,16	89,16	89,16
	No	31	10,84	10,84	100,00
	Total	286	100,0	100,0	

- 9.- **¿Considera que los ambientes físicos asignados para las Oficinas de los Defensores Públicos en Lima Metropolitana son adecuados para el ejercicio de su trabajo?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí son adecuados	25	8,74	8,74	8,74
	No son adecuados	235	82,16	82,16	90,90
	No sabe/No opina	26	9,10	9,10	100,00
	Total	286	100,0	100,0	100,0

- 10.- ¿Considera que los Defensores Públicos o de Oficio cuentan con todos los materiales logísticos (computadoras, papel, impresoras, etc.) que se requieren para ejercer la Defensa de sus asesorados?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	18	6,29	6,29	6,29
	No	248	86,71	86,71	93,00
	No sabe/ No opina	20	7,00	7,00	100,00
	Total	286	100,0	100,0	

- 11.- ¿Cuándo solicitó por primera vez los servicios del Programa de Defensa Pública, verificaron su situación socio-económica o que acredite estado de pobreza o que no podía solventar el costo de un Abogado Particular ?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	0	0	0	0
	No	286	100,0	100,0	100,0
	No sabe No opina	0			
	Total	286	100,0	100,0	

- 12.- ¿Considera que debería incrementarse el número de Defensores Públicos en el área de Lima Metropolitana?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	269	94,06	94,06	94,06
	No	17	5,94	5,94	100,00
	Total	286	100,0	100,0	

Las Entrevistas a los Defensores Públicos

Ficha Técnica

- **La Entrevista.-** Como parte del presente trabajo de investigación se entrevistaron a un total de ocho abogados Defensores de Oficio o Públicos ubicados en las sedes que visitamos en el Centro de Lima,

tanto en el Edificio Alzamora Valdez como en el Consultorio Jurídico Gratuito ubicado en la cuadra 7 del Jr. Carabaya.

- Las entrevistas fueron realizadas en base a un cuestionario de formato abierto, es decir cada entrevistado pudo expresar sus opiniones, las citadas entrevistas tuvieron lugar al final de la jornada laboral, toda vez que tenían por objetivo conseguir que los entrevistados conversen libremente sobre el tema de Defensa Pública, los usuarios del Servicio, las condiciones en la que trabajan, las expectativas que genera su labor, cómo perciben la Justicia en el país, entre otros temas.
- Se entrevistaron de manera aleatoria a 8 de los Defensores Públicos que atendían por turnos en los locales donde se desarrollo la entrevista esto es en el Edificio Alzamora Valdez así como en el Consultorio Jurídico Gratuito ubicado en la cuadra 7 de Jr. Carabaya.
- De los datos personales preguntados en la entrevista se puede describir lo siguiente:
- Sexo.-De los ocho abogados entrevistados 5 (62.5%) abogados eran de sexo masculino y 3 (37.5%) de sexo femenino.
- Edad.-La edad de los ocho abogados entrevistados están en los siguientes rangos (entre 30 y 35 años) 3 (37.5%), (entre 35 y 40) 3 (37.5%) y (más de 40 años) 2 (25%)
- Lugar de Nacimiento.- ante la pregunta del lugar de nacimiento de los abogados entrevistados encontramos que 6 (75%) habían nacido en provincia distinta de Lima y 2 (25%) habían nacido en Lima.

- Estado Civil.-frente a la pregunta sobre el Estado Civil de los entrevistados las respuestas fueron las siguientes: 5 (62.5%) de los abogados eran casados y 3 (37.5%) solteros.
- Estudios.-ante la pregunta sobre el grado de estudios que poseen los entrevistados se encontraron que el total de los 8 (100%) entrevistados son abogados titulados. Asimismo señalaron 5 (62.5%) encontrarse cursando estudios de maestría y 3 (37.5%) haber concluido algún tipo de postgrado o post-título.
- Aspectos Laborales y Económicos.- Del total de los entrevistados los 8 se encuentran bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), no obstante encontrarse laborando más de 10 años al servicio del Ministerio de Justicia, ninguno de los entrevistados goza de estabilidad laboral a través de un contrato a plazo indeterminado sino por el contrario su situación laboral está basada en un contrato de carácter temporal a plazo determinado y bajo las características especiales de la modalidad CAS la misma que implica una serie de recortes en los beneficios laborales tales como 15 días de vacaciones y no acumulación de tiempo de servicios.

Entrevistas Códigos Preguntas y Respuestas

E1 Entrevista realizada en el mes de agosto del 2009 a un abogado Defensor Público, de 34 años, en el Edificio Alzamora Valdez.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Referencia al Programa de Defensa Pública implementado por el Ministerio de Justicia, como una solución favorable al problema planteado en la población cuando tiene que recurrir al Sistema Judicial donde su actuación esta mediatizada por la participación obligatoria de un abogado.

- Manifestó que postuló para ser designado Defensor de Oficio hace seis años y que lo hizo porque quería obtener una práctica profesional intensa situación que no podía conseguir como abogado independiente.
- La relación que guarda con los usuarios del Servicio o Programa de Defensa de Oficio es una relación cordial y personal ya que procura absolver no solo las dudas a nivel legal y asesorar en todo lo que resulte pertinente hacer en torno al caso sino que también brinda consejería en los casos que corresponda.
- Mencionó su preocupación por las condiciones en las que labora toda vez que el Régimen Laboral bajo el cual es contratado es de carácter temporal y limitativo de sus derechos laborales, no obstante es optimista sobre el futuro ya que piensa que los abogados de oficio o público cumplen una labor que es reconocida como necesaria en el Sistema Judicial y en la población en general.
- Describe la situación de la Justicia en el Perú como un intrincado camino como los existentes en la selva donde es necesario conocer bien el aparato jurisdiccional a fin de tener las mejores opciones de defensa a sus patrocinados, asimismo considera como aspecto favorable el ingreso de nuevos magistrados al Poder Judicial en los últimos cinco años, sin embargo al mismo tiempo reconoce que existen niveles en los cuales las arbitrariedades y falta de transparencia al momento que el Poder Judicial administra justicia. También piensa que la población peruana en su mayoría no conoce sus derechos siendo esta una de las tantas causas que da origen a la vulneración de sus derechos.

E2 Entrevista realizada en el mes de agosto del 2009 a una abogada Defensora Pública, de 32 años, en el Edificio Alzamora Valdez

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Señaló sobre el Programa de Defensa Pública que este tiene limitaciones en cuanto a los recursos económicos con los que cuenta pero que la mayor ventaja con lo que cuenta es con un capital humano profesional que conoce del tema y con una buena disposición de servicio.
- Preciso que para ser designado Defensor de Oficio pasó un proceso de selección y que se enteró del citado proceso a través de un amigo que también trabaja en el Ministerio, en la actualidad señala que tiene cinco años trabajando como Defensor Público o de Oficio.
- Afirma que la relación que mantiene con sus patrocinados del Servicio o Programa de Defensa de Oficio es una relación de carácter profesional, debido al corto tiempo con el que cuenta no obstante señala que si alguien le pide un consejo se lo brinda.
- Acotó sobre su condición laboral en el Ministerio de Justicia que esta es de carácter temporal ya que se encuentra bajo los alcances del Contrato Administrativo de Servicios o también conocido por sus siglas CAS. Precisa que tiene planificado renunciar al Servicio luego que obtenga su grado académico de Magister ya que dentro de sus planes esta dedicarse a la docencia universitaria.
- Sobre la Justicia en el Perú opina que la misma resulta relativa por cuanto el Sistema Judicial Peruano es bastante lento y complejo y que hay necesariamente que ir hacia una reforma estructural si se quieren mejorar las cuestiones fundamentales.

E3 Entrevista realizada en el mes de agosto del 2009 a un abogado Defensor Público, de 35 años, en el Edificio Alzamora Valdez.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Manifestó que el Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia, cumple sus fines en la sociedad peruana por cuanto constituye una solución frente al problema de la falta de recursos económicos de muchos procesados que definitivamente si no contarán con un Defensor de Oficio o Público verían recortados y limitados su Derecho de Defensa.
- Sobre cómo fue designado Defensor Público o de Oficio hace ocho años precisa que postuló a una convocatoria y que ganó el concurso público y que lo hizo porque siempre quiso ejercer directamente la Defensa Oral en los tribunales.
- En cuanto a la relación que guarda con sus patrocinados enfatiza que es una relación profesional y personal ya que los casos que él ve tienen implicancia en el derecho penal de menores y derecho de familia por lo que de una u otra forma termina involucrándose con las vivencias de sus patrocinados que hacen uso del Servicio de Defensa Pública, y que en muchas ocasiones él actúa como consejero u orientador familiar en las situaciones que así lo ameritan.
- Señaló que las condiciones en las cuales labora no son las óptimas a nivel laboral ya que trabaja bajo el Contrato Administrativo de Servicios y que piensa que los abogados de oficio o público deberían contar con un contrato a plazo indeterminado.
- Sobre la situación de la Justicia en el Perú consideró que la misma es difícil ya que poco o nada se ha hecho por mejorar los problemas esenciales, tales como la lentitud en la atención de los expedientes y la corrupción que existe en diversos niveles de la Administración de Justicia, sin embargo precisa que la labor que desempeña la hace teniendo en cuenta que es una labor de carácter social porque todas las acciones están orientadas a

brindar una buena asesoría a sus patrocinados en los asuntos legales para los cuales fueron requeridos.

E4 Entrevista realizada en el mes de agosto del 2009 a un abogado Defensor Público, de 42 años, en el Edificio Alzamora Valdez.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Señaló en cuanto al Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia, que el mismo está en constante cambio pero que ha mejorado mucho desde que él se encuentra laborando para el mismo.
- En cuanto a cómo fue designado Defensor Público o de Oficio señala que hace quince años participó de una selección, pasando varias evaluaciones y que desde entonces ha venido laborando para el programa y que si bien estuvo un año fuera de la institución por razones académicas, al momento que retornó al país se incorporó nuevamente a sus labores de Defensor de Oficio.
- Manifestó que la relación que guarda con sus asesorados es profesional principalmente pero que inevitablemente deviene en una relación personal ya que los casos se desarrollan en un tiempo extenso y que es esa situación la que crea una relación personal con los procesados por cuanto se entrevistan en varias oportunidades.
- Sobre las condiciones bajo las cuales labora señala que tiene vigente un Contrato Administrativo de Servicios con el Ministerio de Justicia pero considera que deberían darles otro tipo de vínculo laboral porque mediante esa modalidad sus derechos laborales se encuentran recortados.
- En cuanto a la situación de la justicia en el Perú señala que es una situación bien conocida por toda persona y que pese a que se han

hecho muchos intentos por implementar reformas que solucionen los problemas existentes, como la lentitud o falta de transparencia en la administración de justicia, estos problemas han persistido.

E5 Entrevista realizada en el mes de septiembre del 2009 a un abogado Defensor Público, de 38 años, en el Edificio Alzamora Valdez.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Señaló que el Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia, cuenta con una larga trayectoria y que tiene una buena aceptación del público ya que cumple una labor necesaria pero manifiesta que es necesario dotarle de mayores recursos para poder cubrir mas áreas en el territorio nacional.
- En cuanto a cómo fue designado Defensor Público o de Oficio señala que hace doce años se desempeña en sus funciones y que ingresó a trabajar en el Ministerio producto de una convocatoria pública.
- Manifiesta que la relación que mantiene con sus asesores es profesional y personal ya que así lo determina las mismas condiciones en las cuales se desarrolla la asesoría que brinda por estar a cargo de los casos de menores infractores y ser este un tema vinculado a otros que involucran a la familia en su conjunto.
- Preciso que está ligado al Ministerio de Justicia mediante un Contrato Administrativo de Servicios el mismo que tiene algunas desventajas, pero que anteriormente solo mantenía un contrato de servicios no personales, lo cual hacía más desventajosa su situación laboral pero que espera que en algún momento se mejoren su relación laboral con el Ministerio.
- En cuanto a la situación de la Justicia en el Perú manifiesta que es necesario trabajar en mejorar las condiciones en las cuales

trabajan los auxiliares jurisdiccionales porque si bien es cierto se mejoraron las condiciones a los magistrados, el enorme problema son los auxiliares ya que estos trabajan en muy malas condiciones lo que genera una mala atención y demora.

E6 Entrevista realizada en el mes de septiembre del 2009 a un abogada Defensora Pública, de 39 años, en el Consultorio Jurídico Gratuito ubicado en la cuadra 7 de Jr. Carabaya.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Precisa que el Programa de Defensa Pública resulta necesario en el país especialmente al interior del país donde los pobladores desconocen sus derechos fundamentales o la falta de recursos condiciona la indefensión de estas personas y aunque en Lima la comunicación es mejor que en otros lugares, también una gran masa precisa de los servicios al existir mayor conflicto.
- Sobre cómo fue designado Defensor Público o de Oficio hace diez años precisa que participó en una convocatoria pública y que realiza su trabajo desde ese tiempo y que en algún momento piensa trabajar por su cuenta ya que si bien es una labor que le gusta desarrollar, también entiende que debe realizar otros planes y proyectos personales y profesionales que esta posponiendo.
- Refiere que la relación que guarda con sus asesorados es de carácter profesional pero que si alguno de ellos requiere un consejo o recomendación él la ofrece ya que los temas que trata en muchas ocasiones se prestan para la consejería.
- En cuanto a las condiciones en las cuales labora señala que trabaja bajo el Contrato Administrativo de Servicios pero piensa que se deberían mejorar las condiciones laborales por cuanto la inestabilidad en la cual trabajan no permite proyectarse a futuro y

que una gran mayoría de abogados de oficio piensa en independizarse en algún momento o conseguir la estabilidad en otras instituciones o en el sector privado.

- Opina que la situación de la Justicia en el Perú es preocupante ya que han pasado muchos gobiernos democráticos desde el regreso de la democracia al país y con contadas excepciones no se ha hecho gran esfuerzo por modificar en las cuales se trabaja en el Poder Judicial propiciando las mismas las demoras y la alta corrupción existente que solo se cambiará con una correcta administración de recursos tanto humanos como económicos.

E7 Entrevista realizada en el mes de octubre del 2009 a un abogada Defensora Pública, de 43 años, en el Consultorio Jurídico Gratuito ubicado en la cuadra 7 de Jr. Carabaya.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Explicó que el Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia, cumple varios fines, entre otros garantiza el Derecho de Defensa a la población peruana en todos los lugares donde están asignados, también señala que los profesionales que desempeñan la labor de Defensores Públicos o de Oficio, son abogados con una gran vocación social, proveniente de Universidades con larga data en la enseñanza del Derecho e involucradas en el que hacer social del país por lo cual resulta un programa exitoso.
- Precisa que fue designado Defensor Público o de Oficio hace quince años y que llegó al Ministerio a través de una convocatoria que fue publicada y que ha trabajado todos estos años de manera ininterrumpida.

- Señaló que la relación que guarda con sus patrocinados es profesional y personal porque todo abogado que trabaja en el Programa ve temas de derecho de familia esencialmente y ese tema se presta para la consejería y que esta es parte del mismo trabajo y que al respecto ellos están debidamente preparados para poder trabajar en ese nivel también.
- En cuanto a las condiciones en las cuales labora detalla que se encuentra bajo el Contrato Administrativo de Servicios y que siempre ha constituido un problema el tema laboral para los Defensores de Oficio, pero que anteriormente estaban ligados por servicios no personales, esto es emitían recibos por honorarios profesionales, y que pese a que no son tantos los abogados de oficio, no existe hasta ahora una voluntad de solucionar los problemas laborales por parte de quienes toman las decisiones.
- Refiere que la situación de la Justicia en el Perú es complicada y que es muy difícil de solucionar pero que se puede dentro de los elementos existentes luchar para que el Poder Judicial emita fallos motivados y con criterio de justicia, pero que también es necesaria una reforma que comprenda otros aspectos que permitan modificar aquello que propicia situaciones de inequidad, injusticia o corrupción.

E8 Entrevista realizada en el mes de octubre del 2009 a un abogado Defensor Público, de 40 años, en el Consultorio Jurídico Gratuito ubicado en la cuadra 7 de Jr. Carabaya.

Dentro de los aspectos temáticos tratados con el entrevistado están:

- Es de la opinión que el Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia, funciona con algunas limitaciones por el presupuesto con el que cuentan pero que los recursos humanos con los que cuenta hacen que tenga éxito ya que los abogados de

oficio tienen un fuerte compromiso social con la labor que desempeñan.

- Precisa que asumió la labor de Defensor Público o de Oficio hace diez años y que participó de una convocatoria cuyo proceso de selección aprobó y que desde entonces se desempeña como defensor de oficio y que disfruta de su labor por cuanto todos los días atiende a diversidad de personas con distintos casos que le permiten ejercer la defensa tal como había el pensado en su época de formación universitaria.
- Manifiesta que la relación que guarda con sus patrocinados es de carácter profesional y personal por cuanto hay un contacto continuo y que los temas y el tiempo que demanda cada caso propicia esa cercanía con los usuarios del Servicio.
- Sobre las condiciones bajo las cuales labora indicó que esta bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios no siendo un régimen laboral propiamente.
- Indicó que la situación de la Justicia en el Perú constituye una problemática pendiente de resolver porque los recursos con los que cuenta el Poder Judicial resultan insuficientes para todas las causas que este administra y que solo una reforma que comprenda diversas aristas del problema llegará a dar soluciones a largo plazo.

De la evaluación de las entrevistas a los Defensores Públicos se puede establecer que contribuyen en el funcionamiento del Programa, entre otros hechos:

La posición de quienes ejercen el rol de Defensores Públicos hacia el Programa, ya que de acuerdo a las respuestas brindadas sobre este tema consideraron los ocho entrevistados lo siguiente:

Cuadro N°1

Defensor Público	Opinión sobre el Programa de Defensa Pública
DF1	Es una solución favorable a un problema de la población
DF2	Cuenta con un capital humano profesional que conoce del tema y con buena disposición de servicio.
DF3	Constituye una solución al problema de la falta de recursos económicos de muchos procesados que no podrían contar con un defensor.
DF4	Es un programa constantemente en cambio que ha mejorado desde que se implementó.
DF5	El programa tiene una buena aceptación del público ya que cumple una labor necesaria.
DF6	El programa resulta necesario especialmente en el interior del país.
DF7	El programa de Defensa Pública cumple varios fines, entre otros garantiza el Derecho de Defensa.
DF8	El programa tiene limitaciones económicas pero los recursos humanos con los que cuenta hacen que tenga éxito debido al compromiso social existente.

La cantidad de años de experiencia con los que cuentan los abogados que ejercen el cargo siendo el promedio de 10 años.

Cuadro N°2

Defensor Público	Años de Ejercicio como Defensor Público
DF1	6 años
DF2	5 años
DF3	8 años
DF4	15 años
DF5	12 años
DF6	10 años
DF7	15 años
DF8	10 años

Sobre la relación que mantienen con sus patrocinados del Programa de Defensa Pública señalaron lo siguiente:

Cuadro N°3

Defensor Público	Relación con patrocinados
DF1	Es una relación cordial y personal ya que procura absolver dudas a nivel legal y brinda consejería en los casos que corresponde.
DF2	Es una relación de carácter profesional debido al tiempo, pero cuando alguien le pide un consejo se lo brinda.
DF3	Es una relación profesional y personal ya que ve casos de derecho de familia y derecho penal y de alguna manera participa de las vivencias de sus patrocinados.
DF4	Es una relación de carácter profesional principalmente pero inevitablemente deviene en una de carácter personal ya que los casos se desarrollan en un tiempo extenso.
DF5	Es una relación de carácter profesional y personal ya que así lo determina las mismas condiciones en las cuales se desarrolla la asesoría
DF6	Es una relación de carácter profesional pero si alguien le pide un consejo o recomendación se la ofrece.
DF7	Es una relación de carácter profesional y personal porque ve temas de derecho de familia esencialmente y ese tema se presta a la consejería.
DF8	Es una relación de carácter profesional y personal por el contacto continuo y los temas y tiempo que demanda cada caso.

Desprendiéndose de las respuestas que seis de los ocho Defensores Públicos o de Oficio considera tener una relación de carácter profesional y personal con sus patrocinados, en tanto dos respondieron que es de carácter únicamente profesional.

En cuanto a las condiciones laborales bajo las cuales trabajan los Defensores de Oficio el total de los 8 entrevistados afirmaron laborar bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con el Ministerio de Justicia, no obstante los años que llevan desarrollando las labores de Defensores de Oficio.

En cuanto a la situación de la Justicia en el Perú las opiniones vertidas fueron las siguientes:

Cuadro N°4

Defensor Público	Situación de la Justicia en el Perú
DF1	Un intrincado camino donde es necesario conocer bien el aparato jurisdiccional.
DF2	La Justicia resulta relativa por la lentitud y complejidad del Sistema Judicial, es necesaria una reforma.
DF3	La situación de la Justicia es difícil la lentitud en la atención de los expedientes y la corrupción existente dificulta la labor.
DF4	Considera que los problemas en el Sistema han persistido pese a los intentos de reformas.
DF5	Es necesario trabajar en mejorar las condiciones en las cuales trabajan los auxiliares jurisdiccionales.
DF6	La situación de la Justicia en el Perú es preocupante ya que han pasado muchos gobiernos y no se ha hecho mucho por mejorar el Poder Judicial.
DF7	La situación de la Justicia en el Perú es complicada pero se puede dentro de los elementos existentes luchar para que el Poder Judicial emita fallos motivados y con criterio.
DF8	Es una problemática pendiente de resolver porque los recursos con los que cuenta el Poder Judicial son limitados frente a todas las causas que se presentan.

4.2 Pruebas o Validación de Hipótesis

En el presente estudio se ha trabajado sobre una población o universo de mil usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima y se ha tomado una muestra de 286 usuarios. En relación a la muestra ésta es una muestra representativa de una población finita (1000 usuarios) con un margen de error de +, - 5% de acuerdo a la Tabla de Fisher-Arkin Colton. Tables for Statisticians⁶¹

$N = 1,000$ (tamaño de la población)

$n = 286$ (tamaño de la muestra)

$N/n = 1,000/286 = 3.4965$ esto significa que cada elemento de la muestra representa 3.4965 elementos de la población.

Al tratarse de los valores o resultados del muestro realizado para el presente trabajo de investigación se precisa seguir las reglas de decisión para aceptar o rechazar las hipótesis de la población que se estudia, a tal efecto tendremos en cuenta los resultados obtenidos de la muestra a través de los instrumentos utilizados tales como la encuesta a los usuarios del Programa de Defensa de Oficio y la Entrevista a un grupo de los Defensores Públicos o Defensores de Oficio que participan del Programa.

Hipótesis Específica # 1

Si los usuarios del programa de Defensa Pública son asistidos legalmente de manera adecuada y oportuna durante todo el proceso entonces los Defensores Públicos viabilizan el acceso a la Justicia de la población.

⁶¹ Avila Acosta, Roberto B, Op. Cit. Apéndice

Hipótesis Específica # 2

Si los usuarios del programa de Defensa Pública obtienen resultados favorables en los procesos en los que son asistidos legalmente por los Defensores Públicos entonces los requerimientos de justicia por parte de los usuarios resultan atendidos

Con el fin de realizar la medición de los datos obtenidos en la encuesta se establecieron los siguientes numerales para cada una de las doce preguntas formuladas

Asignación de Numerales

Pregunta #1

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los servicios brindados por los Defensores Públicos y si estos permitieron su acceso a la Administración de Justicia, entendiéndose esta por la posibilidad de iniciar, contestar o defenderse en un Proceso Judicial. Se ha establecido una regla por la cual asignamos dos valores del 2 al 1 a las respuestas para la evaluación de los servicios de Defensa Pública y el acceso a la Administración de Justicia:

Sí	2
No	1

Pregunta # 2

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre el hecho si los Defensores Públicos o de Oficio los asistieron legamente durante todo el proceso. Se ha establecido una regla por la cual asignamos igualmente dos valores que van del 2 al 1 a las respuestas para la evaluación de la Asistencia Legal durante todo el Proceso por parte de los Defensores Públicos:

Sí	2
No	1

Pregunta# 3

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre el desempeño durante el seguimiento del proceso hasta el momento presente. Se ha establecido una regla por la cual asignamos igualmente cinco valores que van del 5 al 1 a las respuestas para la evaluación del desempeño del Defensor de Oficio, durante el seguimiento del proceso, entendiéndose que la evaluación de 5 se refiere a oportuno muy bueno, 4 oportuno bueno, 3 Regular, 2 no oportuno, pésimo y 1 no sabe no opina:

Muy bueno	5
Bueno	4
Regular	3
Pésimo	2
No sabe/No opina	1

Pregunta#4

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los resultados que han obtenido respecto del proceso y él cómo califican a los mismos. Se ha establecido una regla por la cual asignamos igualmente cinco valores que van del 5 al 1 a las respuestas para la evaluación de los resultados de los procesos en los que han intervenido los Defensores de Oficio:

Muy Favorable	5
Favorable	4
Regular	3
Desfavorable	2
Muy Desfavorable	1

Pregunta#5

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre si la publicidad existente del Programa de Defensa Pública de Lima es adecuada, es decir si permite una buena difusión de la existencia del programa. Se ha establecido una regla por la cual asignamos tres valores que van del 3 al 1 a las respuestas para la evaluación de la publicidad existente sobre el Programa:

Sí	3
No	2
No sabe / No opina	1

Pregunta#6

Posición de los usuarios respecto si recomendarían a alguien que se encuentre en la misma situación los Servicios de un Defensor Público o de Oficio. Se ha establecido una regla por la cual asignamos cuatro valores que van del 4 al 1 a las respuestas para sentar posición si recomendarían o no a los Defensores Públicos o de Oficio para el seguimiento de un caso:

Si	4
No	3
Tal vez	2
No sabe/ No opina	1

Pregunta#7

Pregunta sobre si conocen los usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana de que entidad dependen administrativamente los Defensores Públicos en nuestro país. Se ha establecido una regla por la cual asignamos dos valores que van del 2 al 1 a las respuestas sobre si conocen o no de que entidad dependen los Defensores Públicos:

Si conocen	2
No conocen	1

Pregunta#8

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre si los Defensores Públicos cuentan con suficiente experiencia para realizar las funciones que realizan. Se ha establecido una regla por la cual asignamos dos valores que van del 2 al 1 a las respuestas para la evaluación de la experiencia de los Defensores Públicos:

Si	2
No	1

Pregunta#9

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre si los Defensores Públicos cuentan con ambientes físicos adecuados para el ejercicio de su trabajo. Se ha establecido una regla por la cual asignamos tres valores que van del 3 al 1 a las respuestas para la evaluación de los ambientes físicos asignados a los Defensores Públicos para el desarrollo de su trabajo:

Si	3
No	2
No sabe/No opina	1

Pregunta #10

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre si los Defensores Públicos cuentan con todos los materiales logísticos (computadoras, papel, impresoras, etc.) para el ejercicio de su trabajo. Se ha establecido una regla por la cual asignamos tres valores que van del 3 al 1 a las respuestas para la evaluación de los materiales logísticos con los que cuentan los Defensores Públicos para el desarrollo de su trabajo:

Si	3
No	2
No sabe/No opina	1

Pregunta#11

Pregunta sobre si cuándo solicitó el usuario por primera vez los servicios del Programa de Defensa Pública, verificaron su situación socio-económica o que acredite estado de pobreza o que no podía solventar el costo de un Abogado Particular. Se ha establecido una regla por la cual asignamos tres valores que van del 3 al 1 a las respuestas sobre si indagaron la situación socio-económica de los usuarios o si solicitaron acredite estado de pobreza:

Si	3
No	2
No sabe/No opina	1

Pregunta#12

Evaluación de parte de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre si los Defensores Públicos sobre si consideran que debería incrementarse el número de Defensores Públicos en el área de Lima Metropolitana. Se ha establecido una regla por la cual asignamos dos valores que van del 2 al 1 a las

respuestas sobre si consideran debería incrementarse el número de Defensores Públicos en Lima Metropolitana:

Si	2
No	1

Hipótesis Específicas

a) Si los usuarios del programa de Defensa Pública son asistidos legalmente de manera adecuada y oportuna durante todo el proceso entonces los Defensores Públicos viabilizan el acceso a la Justicia de la población.

b) Si los usuarios del programa de Defensa Pública obtienen resultados favorables en los procesos en los que son asistidos legalmente por los Defensores Públicos entonces los requerimientos de justicia por parte de los usuarios resultan atendidos.

A efectos de analizar los datos, medir las variables y verificar de esta manera las hipótesis que se han formulado, hemos procedido a tomar los resultados de las preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 de la encuesta realizada a 286 usuarios del programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana, toda vez que estas preguntas están directamente vinculadas a las hipótesis de presente trabajo.

En cuanto a la distribución de frecuencias al tratarse de una distribución de datos nominales no requiere calcular el número de clases, debido a que el número de clases es igual al número de categorías. En el presente caso tenemos las siguientes distribuciones de frecuencias, para el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 2 de la encuesta, asociada con la variable de atención técnico legal a los usuarios del programa de Defensa Pública. Los resultados se detallan en el cuadro N°5.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 5 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 262 - 24 = 238$$

Cuadro N°5

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Sí fue asistido legalmente durante todo el proceso	262	91,61	262	91,61
No fue asistido legalmente durante todo el proceso	24	8,39	286	100,00
Total	286	100,0		

Asimismo tenemos las siguientes distribuciones de frecuencias, para el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 1 de la encuesta, asociada con la variable de atención técnico legal a los usuarios del programa de Defensa Pública. Los resultados se detallan en el cuadro N°6.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 6 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 260 - 26 = 234$$

Cuadro N°6

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Los servicios brindados por los Defensores Públicos Sí le permitieron el acceso a la Adm. de Justicia	260	90,91	260	90,91
Los servicios brindados por los Defensores Públicos No le permitieron el acceso a la Adm. de Justicia	26	9,09	286	100,00
Total	286	100,0		

Para el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 7 de la encuesta, asociada con la variable desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio del programa de Defensa Pública la distribución de frecuencia es la que se detallan en el cuadro N°7.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 7 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 152 - 5 = 147$$

Cuadro N°7

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Muy bueno el desempeño del Defensor de Oficio	69	24,13	69	24,13
Bueno el desempeño del Defensor de Oficio	152	53,15	221	77,28
Regular el desempeño del Defensor de Oficio	50	17,48	271	94,76
Pésimo el desempeño del Defensor de Oficio	5	1,75	276	96,51
No sabe/ No opina	10	3,49	286	100,0
Total	286	100,0		

Tenemos las siguientes distribuciones de frecuencias, para el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 8 de la encuesta, asociada con la variable desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio. Los resultados se detallan en el cuadro N°8.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 8 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 255 - 31 = 224$$

Cuadro N°8

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Los defensores públicos Sí cuentan con experiencia para el trabajo que desempeñan	255	89,16	255	89,16
Los defensores públicos No cuentan con experiencia para el trabajo que desempeñan	31	10,84	286	100,00
Total	286	100,0		

Obtuvimos las siguientes distribuciones de frecuencias, para el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 4 de la encuesta, asociada con la variable resultados que los usuarios del programa de Defensa Pública obtienen en los casos que son asistidos por los Defensores Públicos. Los resultados se detallan en el cuadro N°9.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 9 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 153 - 10 = 143$$

Cuadro N°9

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Los resultados del proceso son muy favorables hasta el momento.	30	10,49	30	10,49
Los resultados del proceso son favorables hasta el momento	153	53,50	183	63,99
Los resultados del proceso son Regulares hasta el momento	70	24,47	253	88,46
Los resultados del proceso son Desfavorables hasta el momento	23	8,04	276	96,50
Los resultados del proceso son muy desfavorables hasta el momento	10	3,5	286	100,0
Total	286	100,0		

Registramos las siguientes distribuciones de frecuencias, para el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 6 de la encuesta, asociada con la variable posición de los usuarios del programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general. Los resultados se detallan en el cuadro N°10.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 10 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 241 - 9 = 232$$

Cuadro N°10

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Sí recomendaría los servicios de los Defensores Públicos.	241	84,26	241	84,27
No recomendaría los servicios de los Defensores Públicos.	9	3,15	250	87,42
Tal vez recomendaría los servicios de los Defensores Públicos.	18	6,29	268	93,71
No sabe/ No opina	18	6,29	286	100,00
Total	286	100,00		

En el caso de los datos de las respuestas a la pregunta N° 12 de la encuesta, asociada con la variable posición de los usuarios del programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general, tenemos la distribución de frecuencia que se detallan en el cuadro N°11.

El rango o recorrido para los datos que se presentan en el cuadro N° 11 es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos así de esta manera:

$$\text{Recorrido} = 269 - 17 = 252$$

Cuadro N° 11

Categoría	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia Acumulada	Porcentaje Acumulado
Si debería incrementarse el número de Defensores Públicos en Lima.	269	94,06	269	94,06
No debería incrementarse el número de Defensores Públicos en Lima	17	5,94	286	100,00
Total	286	100,0		

Para la evaluación de la **Hipótesis Específica N°1** se ha trabajado con los resultados de las preguntas 1, 2, 3 y 8 de la encuesta realizada a los usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima.

1era. Hipótesis Específica

Los usuarios del programa de Defensa Pública son asistidos legalmente de manera adecuada y oportuna durante todo el proceso entonces se evidencia que los Defensores Públicos viabilizan el acceso a la Administración de Justicia de la Población.

La variable asistencia técnico legal a los usuarios del Programa de Defensa Pública, se ha medido en función de los resultados de las preguntas N° 2 y N° 1 de la encuesta realizada a 286 usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana, al tratarse de una variable cualitativa nominal toda vez que indica presencia o ausencia de una determinada característica y a la vez implica la opinión de los usuarios respecto de Si es adecuada o No la asistencia técnico legal que recibieron la medida de tendencia central que hemos utilizado para el presente caso es la moda es decir cuál es el valor que se repite o es más extenso.

Cuadro N°12

Variable		Categorías	A.N	Frecuencia	Porcentaje
Asistencia Técnico Legal a los usuarios del Programa de Defensa Pública.	P.2 Enc.	Sí fue asistido legalmente durante todo el proceso	2	262	91,61 %
		No fue asistido legalmente durante todo el proceso	1	24	8,39%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 2 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite es el de la respuesta: - adecuada atención (opción sí) cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 2, con un total de frecuencia de 262.

Cuadro N°13

Variable		Categorías	A.N	Frecuencia	Porcentaje
Asistencia Técnico Legal a los usuarios del Programa de Defensa Pública	P. 1 Enc.	Si permite acceso a la Administración de Justicia.	2	260	90,91%
		No permite el acceso a la Administración de Justicia	1	26	9,09%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 1 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite es el de la respuesta: - Si permite acceso a la Administración de Justicia cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 2, con un total de frecuencia de 260.

La variable Desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio, se ha medido en función de los resultados de las preguntas N° 3 y N° 8 de la encuesta realizada a 286 usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana, al tratarse de una variable cualitativa ordinal toda vez que indica la opinión de los

usuarios respecto del desempeño de los Defensores Públicos, siendo la medida de tendencia central utilizada para el presente caso es la moda es decir cuál es el valor que se repite o es más extenso. Asimismo en el caso de la pregunta N°8 se trata de una variable cualitativa nominal que indica presencia o ausencia en la característica experiencia del Defensor Público, y se ha empleado igualmente la moda como medida de tendencia central.

Cuadro N°14

Variable		Categorías	A.N	Frecuencia	Porcentaje
Desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio	P.3 Enc.	Muy Bueno	5	69	24,13%
		Bueno	4	152	53,15%
		Regular	3	50	17,48%
		Pésimo	2	5	1,75%
		No sabe/No opina	1	10	3,49%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 3 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite es el de la respuesta: - Bueno el Desempeño de los Defensores Públicos cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 4, con un total de frecuencia de 152.

Cuadro N°15

Variable		Categorías	A.N	Frecuencia	Porcentaje
Desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio	P.8 Enc.	Experimentado Sí	2	255	89,16%
		No Experimentado	1	31	10,84%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 8 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite es el de la respuesta: - Sí cuentan con experiencia los Defensores

Públicos o de Oficio cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 2, con un total de frecuencia de 255.

Para el caso de la **Hipótesis Específica N°2** se ha trabajado con los resultados obtenidos de las preguntas 4, 6 y 12 de la encuesta realizada a 286 usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana. Estando vinculados los datos de las respuestas a la pregunta N° 4 a la variable Resultados del Programa y los datos de la respuesta N° 6 y N°12 a la posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general.

2da.Hipótesis Específica

Los usuarios del programa de Defensa Pública en su mayoría obtienen resultados favorables en los procesos en los que son asistidos por los Defensores Públicos entonces los requerimientos de justicia por parte de importante de los usuarios resultan atendidos.

Cuadro N°16

Variable		Categorías	A.N	Frec.	Porcentaje
Los resultados que los usuarios del programa de Defensa Pública obtuvieron en los casos que fueron asistidos por los Defensores Públicos	P.4 Enc.	Muy favorable	5	30	10,49%
		Favorable	4	153	53,50%
		Regular	3	70	24,47%
		Desfavorable	2	23	8,04%
		Muy desfavorable	1	10	3,50%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 4 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite es el de la respuesta: - Los resultados que obtuvieron son favorables en los casos asistidos por los Defensores Públicos cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 4, con un total de frecuencia de 153.

Cuadro N°17

Variable		Categorías	A.N	Frec.	Porcentaje
Posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general	P.6 Enc.	Si recomendaría los servicios	4	241	84,26%
		No recomendaría los servicios	3	9	3,15%
		Tal vez	2	18	6,29%
		No sabe no opina	1	18	6,29%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 6 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite, es el de la respuesta: - Sí recomendaría los Servicios de los Defensores Públicos cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 4, con un total de frecuencia de 241.

Cuadro N°18

Variable		Categorías	A.N	Frec.	Porcentaje
Posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general	P.12 Enc.	Si debería incrementarse el número de Defensores	2	269	94,06%
		No debería incrementarse el número de Defensores	1	17	5,94%

La moda en el conjunto de datos de la respuestas a la pregunta 12 de la encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Publica, es decir el valor que más se repite es el de la respuesta: - Sí debería incrementarse el número de Defensores Públicos, cuya valoración de acuerdo al cuadro de asignación de numerales es de 2, con un total de frecuencia de 269.

4.3 Discusión de los Resultados

En el presente trabajo de investigación debido a que no se contaban con estudios anteriores, el mismo tuvo en un inicio un carácter exploratorio, pasando en un segundo momento a una investigación de carácter descriptivo en la cual se busca comprender cómo funciona el Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana, para este efecto se formularon dos hipótesis específicas sobre el Programa de Defensa Pública.

Se elaboraron dos cuestionarios como instrumentos de investigación, el primero corresponde al cuestionario de doce preguntas cerradas de una encuesta formulada a los usuarios del Programa de Defensa Pública, y el segundo corresponde al cuestionario de formato abierto con cinco aspectos temáticos, aplicado a ocho Defensores Públicos.

Empezaremos la discusión de los resultados señalando que toda vez que en la escala nominal los valores son completamente arbitrarios, no existe modo alguno en el que se puedan usar estos valores para definir coeficientes, por lo tanto todos los coeficientes tienen que estar basados en una comparación entre las frecuencias.

Asimismo en una distribución de datos nominales no se requiere calcular el número de clases, puesto que el número de clases es igual al número de categorías.

En la primera hipótesis tenemos dos variables independientes que son las siguientes:

1°Variable Independiente.- La atención técnico legal a los usuarios del programa de Defensa Pública.

2°Variable Independiente.- Desempeño de los Defensores Públicos o de Oficio

Para evaluar **la variable asistencia técnico legal** tenemos los datos obtenidos de los resultados a las preguntas 2 y 1 de la encuesta realizada

a 286 usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima, resultando de la lectura de los datos de la pregunta 2 que la distribución de frecuencia mayoritaria y predominante es la categoría - Sí fue asistido legalmente durante todo el proceso con una frecuencia de 262 y un porcentaje de 91,61% en tanto que la categoría - No fue asistido legalmente durante todo el proceso cuenta con una frecuencia de 24 y un porcentaje del 8,39%.

Asimismo de los resultados de la pregunta 1 de la encuesta vinculados igualmente a la **variable asistencia técnico legal** tenemos que la categoría – Los servicios brindados por los Defensores Públicos sí le permitieron el acceso a la Administración de Justicia cuenta con una frecuencia de 260 y un porcentaje de 90,91%. En tanto la categoría – Los servicios brindados por los Defensores Públicos no le permitieron el acceso a la Administración de Justicia cuenta con una frecuencia de 26 y un porcentaje de 9,09%.

Para evaluar la **variable desempeño de los Defensores Públicos** tenemos los datos obtenidos de los resultados a las preguntas N°3 y 8 de la encuesta realizada a los usuarios del Programa de Defensa Pública, resultando de la lectura de los datos de la pregunta 3 que la distribución de frecuencia mayoritarias son las categoría –Bueno el desempeño del Defensor de Oficio con una frecuencia de 152 y un porcentaje de 53.15%, así como la categoría – Muy bueno el desempeño del Defensor de Oficio con una frecuencia de 69 y un porcentaje de 24.13% totalizando una frecuencia acumulada de 221 y un porcentaje acumulado de 77,28%.

De otro lado los resultados de la pregunta 8 vinculados igualmente a la **variable desempeño de los Defensores Públicos** tenemos que la categoría – Los Defensores Públicos si cuentan con experiencia para el trabajo que desempeñan cuenta con una frecuencia de 255 y un porcentaje de 89,16%.

Pudiéndose señalar que estando a los resultados de las variables antes detalladas se puede afirmar que de acuerdo a la apreciación de los usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima consideran que Si fue asistido legalmente durante todo el proceso (frecuencia 262, porcentaje 91,61%) y que los servicios brindados por los Defensores Públicos si les permitieron el acceso a la Administración de Justicia (frecuencia 260, porcentaje 90,91%).

Asimismo al evaluar el Desempeño de los Defensores Públicos los resultados muestran que los usuarios consideran que el desempeño del Defensor Público es Bueno (frecuencia 152, porcentaje 53,15%) y Muy bueno el desempeño del Defensor Público (frecuencia 69, porcentaje 24,13%). También expresaron que consideran que los Defensores Públicos si cuentan con experiencia para el trabajo que desempeñan (frecuencia 255, porcentaje 80,16%).

Resultando de esta manera si se toma en cuenta el total de la muestra de 286 usuarios, podemos afirmar que la Hipótesis Específica N°1 **Los usuarios del programa de Defensa Pública son asistidos legalmente de manera adecuada y oportuna durante todo el proceso entonces se evidencia que los Defensores Públicos viabilizan el acceso a la Administración de Justicia de la Población.** Es validada en la medida que existe una posición predominante entre los usuarios del Programa al considerar que en un 91,61% Si son asistidos legalmente durante todo el proceso, y que de otro lado 90,91% consideran que los servicios brindados por los Defensores Públicos les permitieron el acceso a la Administración de Justicia y que consideran que el desempeño de los Defensores Públicos es Bueno en un 53,15% y muy bueno en un 24,13%, así como pondera un 80,16% que los Defensores Públicos sí cuentan con experiencia para el trabajo que desempeñan.

En la segunda hipótesis específica tenemos dos variables independientes que son las siguientes:

1°Variable Independiente Los resultados que los usuarios del programa de Defensa Pública obtienen en los casos que son asistidos por los Defensores Públicos.

2°Variable Independiente Posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general.

Para evaluar **la variable Los resultados que el usuario del programa de Defensa Pública obtienen en los casos que son asistidos por los Defensores Públicos**, tenemos los datos obtenidos a la pregunta N°4 de la encuesta realizada a 286 usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima, de la lectura de los mismos se observa que la distribución de frecuencia mayoritaria y predominante es la categoría – Los resultados del proceso son favorables hasta el momento con una frecuencia de 153 y un porcentaje de 53,50%, así mismo la categoría - Los resultados del proceso son muy favorables hasta el momento, cuenta con una frecuencia de 30 y un porcentaje de 10,49% sumando ambas opiniones un total de 63,99%, por otro lado la categoría - Los resultados del proceso son regulares hasta el momento cuenta con una frecuencia de 70 y un porcentaje de 24,47%. Por contraste la categoría – Los resultados del proceso son desfavorables cuenta con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 8,04%, y finalmente la categoría – Los resultados del proceso son muy desfavorables hasta el momento cuenta con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 3,5%.

Para evaluar **la variable - Posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general** tenemos los datos obtenidos de los resultados a las preguntas N° 6 y 12 de la encuesta realizada a los usuarios del Programa de Defensa Pública, resultando de la lectura de los datos a la pregunta 6 que la distribución de frecuencia mayoritaria es la categoría – Sí recomendaría los servicios de los Defensores Públicos con una frecuencia de 241 y un porcentaje de 84,26%, en contraste la categoría - No recomendaría los servicios de los

Defensores Públicos cuenta con una frecuencia de 9 y un porcentaje de 3.15%, la categoría – Tal vez recomendaría los servicios de los Defensores Públicos cuenta con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 6,29%, y la categoría – No sabe/ No opina con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 6,29%.

Asimismo de los resultados de la pregunta 12 de la encuesta vinculados igualmente a la **variable Posición de los usuarios del Programa de Defensa Pública sobre los Defensores Públicos en general** tenemos que la categoría – Sí debería incrementarse el número de Defensores Públicos en Lima cuenta con una frecuencia de 269 y un porcentaje de 94,06%. En tanto la categoría – No debería incrementarse el número de Defensores Públicos en Lima, cuenta con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 5,94%.

De los resultados de las variables antes detalladas se puede señalar que la apreciación de los usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima, recogidas a través de la encuesta realizada, es en el sentido de considerar - Los resultados del proceso les son favorables hasta el momento (frecuencia 153, porcentaje 53,50%) y que – Los resultados del proceso les son muy favorables hasta el momento (frecuencia 30, porcentaje 10,49%) totalizando estas respuestas en sentido favorable a una frecuencia acumulada total de 183 y un porcentaje acumulado de 63,99%. Asimismo se puede destacar el hecho que los usuarios del Programa de manera predominante consideran que sí recomendarían los servicios de los Defensores Públicos (frecuencia 241, porcentaje 84,26%)

De esta manera si se toma en cuenta el total de la muestra de 286 usuarios, podemos afirmar que la Hipótesis Específica N°2 **Los usuarios del programa de Defensa Pública en su mayoría obtienen resultados favorables en los procesos en los que son asistidos por los Defensores Públicos entonces los requerimientos de justicia por parte de importante de los usuarios resultan atendidos.** Es validada

en la medida que existe una posición predominante entre los usuarios del Programa al considerar un 53,50% que Los resultados del proceso les son favorables hasta el momento de realizada la encuesta, y un 10,49% consideran que Los resultados les fueron muy favorables hasta el momento, sumando estas dos categorías un porcentaje acumulado favorable del 63,99% en cuanto a los resultados obtenidos en el proceso en los que son atendidos por los Defensores Públicos. Asimismo consideran que sí recomendarían los servicios de los Defensores Públicos en un 84,27% evidenciándose en los porcentajes antes señalados que los resultados obtenidos en su mayoría son favorables y que en consecuencia los requerimientos de justicia por parte importante de los usuarios de Programa resultan atendidos.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1. Se ha determinado que el Programa de Defensa Pública o de Oficio implementado por el Ministerio de Justicia que funciona en Lima y que fue objeto de análisis en el presente trabajo durante el año 2009, viabiliza el acceso a la administración de justicia a los usuarios del Programa a través de la asistencia técnico legal adecuada y oportuna a lo largo de todo el proceso en los cuales intervienen los Defensores Públicos o de Oficio, no obstante algunas condiciones en las cuales se desarrolla el Programa y que quedaron expresadas en los resultados a las preguntas 9 y 10 de la encuesta a los usuarios del Programa, en estas preguntas se indagó las condiciones materiales con las cuales cuentan los Defensores Públicos para el desempeño de sus funciones.
2. El Programa de Defensa Pública o de Oficio concreta en la realidad o hace posible a través de la actuación de los Defensores Públicos o de Oficio, que el Derecho de Defensa sea ejercido por un mayor número de personas en el país, evitándose una situación de indefensión creada a partir de la imposibilidad de poder contratar los servicios de un abogado de manera particular. Asimismo en el hipotético caso de no contarse con el Programa denominado Servicio de Defensa Pública el Estado actuaría con arbitrariedad, asumiendo practicas violatorias de los Derechos Humanos elementales consagrados en los principales Instrumentos Internacionales a los cuales se encuentra suscrito o adherido nuestro país.
3. El Programa de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia constituye durante el 2009 por todas sus características la concreción en la realidad del diseño de Políticas Públicas de carácter social en el Sector Justicia toda vez que atiende una necesidad urgente de la población con relación a los requerimientos de Justicia al proporcionar el servicio de abogados en forma gratuita a fin de que este ejerza la

Defensa de los emplazados ante la Administración de Justicia y que no tienen la posibilidad de acuerdo a sus ingresos o a sus gastos de contratar los servicios profesionales de un abogado por sus propios medios a efectos de poder ejercer su defensa ante los Tribunales de Justicia Nacional, incorporando en este sentido a la población que se encuentra excluida en razón de sus condición socio económica, dándole las mismas condiciones de igualdad en la que se encuentran aquellos que si cuentan con sus propios recursos para asumir su defensa ante la Administración de Justicia.

4. El Programa de Defensa Pública al viabilizar el ejercicio del Derecho de Defensa a través de sus abogados quienes asumen la defensa de las personas que requieren los servicios de los mismos y que no pueden contratar los servicios de un abogado particular, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú complementando por tanto las bases necesarias para la estabilidad que requiere todo Estado Democrático de Derecho a efectos de impulsar los procesos para el desarrollo de la confianza en el país por parte de la comunidad internacional, situación que pasa en el presente caso por el respeto del Estado Peruano de los Derechos Humanos esenciales de su población.
5. De acuerdo a los datos recogidos a través de la entrevista del trabajo de los Defensores de Oficio se puede afirmar que si bien el diseño de las Políticas Sociales y particularmente del Programa de Defensa de Oficio tiene como regla general la focalización, es decir destinar el mismo a los pobladores de escasos recursos económicos también es cierto que las características socioeconómicas de parte importante de la población peruana, así como la suscripción de Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos que ha suscrito el Estado Peruano, establecen el Derecho de Defensa como Derecho Humano, estando el Perú obligado al cumplimiento de estos tratados por

lo cual tiene que asegurar la cobertura a todos los usuarios que requieran los servicios de los Defensores Públicos.

6. Se ha podido establecer a través de la encuesta realizada a los usuarios del Programa de Defensa Pública de Lima Metropolitana que la evaluación de los resultados obtenidos por los usuarios en los procesos en los cuales intervinieron los Defensores Públicos es favorable, asimismo el hecho que consideren que el desempeño de los Defensores Públicos es bueno y que podrían recomendar a otras personas los servicios de los Defensores Públicos en similares circunstancias por las que tomaron los servicios evidencia una posición favorable frente al programa. Asimismo al opinar los usuarios del programa de forma mayoritaria que debería incrementarse el número de Defensores Públicos en Lima Metropolitana revela que el Programa de Defensa Pública cuenta con la acogida necesaria para continuar en el tiempo e implementarse adecuadamente.
7. Existe una falta de información de parte de la población potencialmente usuaria de la existencia del Programa o Servicio de Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia situación que en la práctica podría encontrarse ocasionando que personas de escasos recursos económicos contraten los servicios de un letrado a costa de poner en peligro su propia subsistencia por ignorar la posibilidad de contar con un abogado a su servicio en forma gratuita.
8. Los resultados obtenidos de las entrevistas a los ocho Defensores Públicos, muestran los contrastes del Programa por un lado que los Defensores de Oficio o Públicos cuentan con experiencia en sus labores tanto por el tiempo que desempeñan su labores como por los estudios con los que cuentan, sin embargo no cuentan con un contrato de trabajo a plazo indeterminado sino que laboran bajo un tipo de Contrato de corta duración. A pesar de las condiciones en las que trabajan mantienen un servicio que ofrece a los usuarios no solo asesoría legal gratuita sino

que en muchos casos en adición a ello brindan consejería familiar, mejorando con este tipo de orientación la calidad de vida de los usuarios. Otro punto a resaltar es que no obstante que es bien conocido que las condiciones bajo las cuales se administra Justicia en nuestro país son deficientes este colectivo de profesionales dentro de las posibilidades escasas con las que cuentan, desarrollan el Programa de Defensa Pública obteniendo resultados.

5.2 Recomendaciones

1. En base a la información obtenida en el presente trabajo de investigación se sugiere que en el diseño de los programas o servicios en el Sector Justicia se tome en cuenta el contenido de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de manera integral a efectos que se regule de manera coherente el desarrollo de los mismos ya que si bien en la practica el programa objeto de estudio es decir el de Defensa Pública viabiliza mediante la atención técnica legal adecuada y oportuna a través de todo el proceso en los cuales intervienen los Defensores Públicos así como los resultados obtenidos por los letrados evidencia un buen desempeño de los Defensores Públicos debe tenerse en cuenta que los Defensores Públicos no pueden denegar la atención a quienes lo soliciten por constituirse el Derecho de Defensa en Derecho Humano protegido, sin embargo la regulación existente tanto en la Constitución así como en la Ley 29360 podrían eventualmente propiciar a que se deniegue la atención toda vez que podría argumentarse que el programa o servicio está previsto únicamente para los pobladores de escasos recursos económicos y en los casos que la ley lo determine como obligatorio.
2. De la investigación realizada sobre del Programa o Servicio de Defensa Pública en Lima se ha podido establecer que los requerimientos de justicia en los pobladores de la ciudad de Lima donde se desarrollo el presente trabajo, son vastos y que si bien el programa cumple con los

finde de viabilizar el acceso a la Administración de Justicia a los usuarios del Programa, se sugiere una ampliación en la red de Defensores Públicos, a fin que se descentralice el trabajo que estos realizan debiendo tenerse en cuenta en los planes futuros la extensión de la ciudad de Lima y las dificultades que los pobladores encuentran en desplazarse de un punto a otro

3. En base a los datos extraídos de las respuestas de la entrevista formuladas a los abogados Defensores de Oficio o Públicos se sugiere a las autoridades del Ministerio de Justicia a cargo del Programa o Servicio de Defensa Pública que se dote de condiciones adecuadas para el mejor funcionamiento del Programa, no sólo en la logística con la que necesita contar, tal como que los Defensores Públicos cuenten con computadoras, con oficinas adecuadas que permitan un nivel de privacidad con sus patrocinados a fin que realicen una mejor defensa. Asimismo otro rubro que es preciso recomendar en esta parte es a las autoridades a cargo de los Defensores Públicos de proporcionar condiciones laborales adecuadas ya que de acuerdo a sus respuestas, los mismos carecen de un régimen laboral adecuado que les permita planificar su propio desarrollo personal y profesional ya que los contratos que los vinculan al Ministerio son bastante inestables, no obstante la mayoría contar con varios años de labores como Defensores de Oficio o Públicos, explicándose dicha situación por haber estado vinculados anteriormente a través de Contratos de Servicios No Personales, figura legal empleada con frecuencia a fin de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, este hecho debe ser materia de reflexión por parte de quienes formulan las políticas laborales a fin de que no se vulnere también los derechos de los Defensores Públicos y se pueda asegurar la existencia del Programa en el tiempo y mejorar el mismo.
4. De los resultados obtenidos en la encuesta formulada a los usuarios del Programa o Servicio de Defensa Pública se recomienda una mayor

difusión de la existencia del Programa o Servicio de Defensa Pública toda vez que los usuarios tomaron conocimiento en su mayoría a través de la autoridad jurisdiccional, es decir toman conocimiento cuando están inmersos en la necesidad del Servicio pero resultaría de gran utilidad que la población en su conjunto conociera de la existencia del Programa o Servicio así como sus características a fin que la población conozca que puede hacer uso del servicio y acceder a la Administración de Justicia con la debida asesoría de abogados letrados.

5. Asimismo se recomienda que la difusión del concepto de Derecho de Defensa entre otros derechos recogidos en nuestra Constitución Política y en Tratados Internacionales suscritos por el gobierno del Perú, sea parte de la currícula escolar en el nivel secundario, toda vez que un Estado Democrático de Derecho, donde la Administración de Justicia corresponde al Estado, donde existe un aparato independiente encargado de esta labor, debe procurarse que la población en general sea conocedora de sus derechos elementales a fin que puedan ejercerlos válidamente de ser el caso.
6. Se recomienda asimismo que se continúe con la investigación del tema de las Políticas Sociales en el Sector Justicia, toda vez que se requiere de otros estudios a nivel nacional a fin de poder establecer diagnósticos que permitan mejorar los requerimientos de Justicia por parte de la población de nuestro país así como mejorar el acceso de la misma a la Administración de Justicia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Amartya Sen. Justicia Santillana Ediciones Generales, Mexico 2010 Titulo original en inglés: The Idea of Justice, publicado por Penguin Press, 2009. Traducido por Hernando Valera Villa.
2. Ávila Acosta, Roberto B. Introducción a la Metodología de la Investigación (La Tesis Profesional) Estudios y Ediciones, Lima Perú. 1997.
3. Access to Justice. General Secretaria. Organization of American States Washington D.C. 20006. January 2007.
4. Bernal Ballesteros, Enrique (En colaboración con Alberto Otárola Peñaranda) La Constitución de 1993 (Análisis Comparado) Editorial Rao. 5ta Edición 1999.
5. Burky Shahid Javed. Desarrollo Económico y Reforma Judicial” Revista Banco Mundial, . Washington D.C. 1997
6. Buscaglia, Edgardo. Los principales obstáculos de la Reforma Judicial en América Latina y el Caribe” Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1997
7. Bustos Ramírez, Juan y Hernán Hormazabal Malarée. Lecciones de Derecho Penal. Editorial Trotta, Madrid, 1997 Volumen I y II.
8. Comisión Andina de Juristas Apuntes de Derecho Penal y Justicia Procesal Penal para Defensores de Oficio. Lima, Perú 2001.
9. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Suscrita por el Gobierno del Perú el 1977 y aprobado mediante Decreto Ley N°22231 de fecha 11 de julio de 1978.
10. Carpio Marcos, Edgar. La Interpretación de los Derechos Fundamentales Palestra Editores. Lima, Perú. 2003

- 11.** Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. (Actualizado a Enero de 2007).
- 12.** Delgado Gutiérrez, Adriana. Las Políticas Sociales en Perspectiva de los Derechos y la Justicia. CEPAL. Bogotá 2002.
- 13.** Eyzaguirre, Hugo. Marco Institucional y Desarrollo Económico: La Reforma Judicial en América Latina. Año 1997. New York, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- 14.** Gamero Requena, Julio. Políticas Sociales Post-Keynesianas (Después del ajuste ¿Qué modelo?) Biblioteca virtual Flasco.Org. Argentina, 2009.
- 15.** Gonzales de Olarte, Efraín. Crecimiento, desigualdad e ingobernabilidad en el Perú.(En: El Estado esta de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia. Editor Víctor Vich) IEP Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú, 2005.
- 16.** Landa Arroyo, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Palestra Editores. Lma, Perú. Segunda Edición.2003.
- 17.** Macionis J., John & Ken Plummer. Sociología. Prentice Hall. Madrid 1999
- 18.** Moix Martínez, Manuel. Cómo se entiende hoy la política social. Consideraciones Críticas. Editorial de la Universidad Complutense. Madrid, 1988.
- 19.** Monroy Gálvez, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1996
- 20.** Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Octava Edición, 2000
- 21.** Parodi Trece, Carlos. Perú 1960-2000 políticas económicas y sociales en entornos cambiantes. Universidad del Pacífico Centro de Investigación. Lima Perú.2002.

- 22.**Parodi Trece Carlos. Economía de las Políticas Sociales. Universidad del Pacífico Centro de Investigación. Lima Perú.2002.
- 23.**Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A(XXI) del 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Perú mediante Decreto Ley N° 22128 de fecha 28 de marzo de 1978
- 24.**Passara, Luis. Jueces, Justicia y Poder en el Perú. CEDYS, Industrial Gráfica. Lima, Perú, 1982.
- 25.**Quiroga León, Aníbal. Los Derechos Humanos, el Debido Proceso y las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia. En la Constitución de 1979 y sus Problemas de Aplicación. Cultural Cuzco S.A. Lima 1987.
- 26.**Reforma Judicial en América Latina y el Caribe: Procedimientos de la Conferencia del Banco Mundial. W.H. Malik, M. Rowat y M Dakolias, Washington D.C. Estados Unidos N.A. 1997.
- 27.**Rubio Correo, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 1999.
- 28.**Siles Vallejos, Abraham. Modernización y Reforma de los Sistemas de Justicia en América Latina y El Caribe. Cuadernos de Debate Judicial. Vol. I. Consejo de Coordinación Judicial, Lima 1998.